TEMA I

FUNCIÓN NOTARIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS; FUNCIÓN NOTARIAL Y LA COLABORACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS

Coordinador Internacional:

Not. Pedro Carrión García de Parada (España)

Coodinador Nacional y Ponente:

Not. Luis Manuel Ramírez Perches (México-Jalisco)

**Madrid, España
Mayo de 2012**

FUNCIÓN NOTARIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS; FUNCIÓN NOTARIAL Y LA COLABORACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS¹

I. El Estado ha de hacer realidad diversos intereses, valores y derechos fundamentales, consagrados generalmente a nivel constitucional: seguridad jurídica y legalidad; dignidad de la persona y de sus derechos inviolables, libre desarrollo de la personalidad; protección de los extranjeros y de los inmigrantes, igualdad sin discriminación, libertad ideológica, de religión y de pensamiento, derecho a tutela judicial, contribución al sostenimiento de los gastos públicos, derecho a la propiedad y a su función social, protección del medio ambiente y de los recursos naturales, conservación del patrimonio artístico y cultural, derecho a una vivienda digna y adecuada, a la utilización del suelo sin especulación, atención a los disminuidos físicos, a la tercera edad, a la infancia y juventud, a las mujeres, a los consumidores, desarrollo del sector económico, modernización de la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, la industria y el comercio, protección de los bienes de dominio público, del espacio aéreo, de las costas, playas, de las aguas, de los montes y zonas especiales, de las minas, de los recursos energéticos, etc.

¹ Por tener México un sistema Federal, donde la materia Notarial, está reservada para su legislación a cada una de las 32 entidades federativas de la República, únicamente nos referiremos a la Legislación Notarial del Distrito Federal (LNDF), del Estado de Jalisco (LNJal) y de algún otro estado de la República, pues el presente trabajo fue respondido amablemente por algunos de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electrónicos y Telemáticos de la Asociación Nacional del Notariado (Notario Antonio Andere Pérez Moreno (D.F.), Notario David F. Dávila Gómez (D.F.), Notario Gerardo Gaxiola Díaz (Sin), Notario Karim Francisco Martínez Lizárraga (B.C.S.), Notario Rubén Alejandro Morelos Prado (Mich), Notario Horacio Sobarzo Morales (Son), Notario Luis Eduardo Ugalde Tinoco (Qro.)), el ex presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano Notario Heriberto Castillo Villanueva (D.F.), y por el coordinador nacional de este tema en México, el presidente de la Comisión de asuntos Electrónicos y Telemáticos de la Asociación Nacional del Notariado Notario Luis Manuel Ramírez Perches (Jal.).

¿Son ideas válidas para su país? Coméntelo sucintamente.

I. Si son ideas válidas. El estado persigue la consecución de todos y cada uno de estos puntos, aunque en algunos esté más distante de otros de conseguirlo en un futuro inmediato.

II. El notario como funcionario u oficial público que actúa por delegación de la soberanía del Estado en el ejercicio de la función pública, presta un servicio de interés general, forma parte integrante de la Administración Pública y contribuye de forma especial y significativa a hacer realidad y velar por los valores, intereses y derechos a que se refiere el punto anterior.

En efecto, el notario:

–. **Vela como jurista cualificado**, en quien el Estado y los ciudadanos confían, por la **seguridad jurídica** controlando de una manera imparcial, independiente y responsable **la legalidad** de los actos y negocios que se celebran mediante los documentos que él autoriza; ejerce de principal instrumento de justicia preventiva. El notariado es uno de los instrumentos legales fundamentales previstos por nuestro Derecho para la consecución de la seguridad jurídica. Controla la legalidad y dota de seguridad al tráfico jurídico. Con ello refuerza su actividad más típica: la autorización del documento; bien directamente: mediante mayor control de los requisitos previos precisos para autorizar la escritura (o sea, sustituir las advertencias e informaciones que presta el notario por una mayor preocupación por que se cumplan todas las condiciones precisas: autorizaciones, licencias, precios máximos, derechos de adquisición preferente, descripción de linderos y superficies, vecindad civil, régimen económico matrimonial, representación que se ostenta, suministros de la vivienda, finca de secano o regadío, etc.); bien indirectamente: mediante la realización de nuevas actividades no estrictamente notariales, generalmente posteriores a la autorización del documento (principalmente liquidación de impuestos, inscripción en Registros públicos). Tal actividad se pone especialmente de manifiesto en la contratación administrativa, urbanismo: reparcelaciones; medio rural: parcelaciones, divisiones, segregaciones, unidades mínimas de cultivo, concentración parcelaria, derechos de tanteo o retracto legales; montes: inmatriculación de fincas colindantes con montes catalogados, enajenación de finca forestal; costas: inmatriculación fincas en zonas de protección, límites a la transmisión; minas; enajenación de bienes declarados de interés cultural o incluidos en el inventario del patrimonio histórico español, etc.).

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa?

Comenzaré citando al colega y Doctor Bernardo Pérez Fernández del Castillo quien en un artículo titulado Notario Público dice: “Entre los notarialistas ha sido ampliamente debatido si el notario es o no funcionario público. Las teorías sobre la naturaleza jurídica de la actuación notarial, unas afirman que es un funcionario público, otras lo consideran un profesionista liberal, y las eclécticas o mixtas, sostienen que es una función pública desarrollada por un profesionista liberal. Históricamente fue la Ley del Ventoso XI de 1803, la que por primera vez estableció que el notario es un funcionario público ... Sin embargo, la Ley del Notariado francesa de 1943, rectifica su postura y lo denomina ‘oficial público’. En México fue la ley de 1901 la que calificó al notario como funcionario público. Las posteriores de 1932, 1945, y en el texto original de la de 1980 siguieron este escrito. Por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 1986, se estableció que el notario es un ‘profesional del derecho’. Por mi parte me limitaré a hacer un estudio exegético de la legislación mexicana para concluir que el notario no es un funcionario público por no estar enquistado dentro de la organización de la administración pública, no recibir salario, no existir contrato de trabajo o relación jurídica de dirección y dependencia; el Estado no responde por los actos de él, su ingreso no es por nombramiento gracioso, sino por examen de oposición, y su cargo normalmente es vitalicio.”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en el año de 2005, que los Notarios no somos servidores públicos, tal y como se desprende de la Tesis que se transcribe en la nota a pie.²

² “Registro No. 177903

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Julio de 2005

Página: 795

Tesis: P/J. 75/2005

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PÚBLICOS.

Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reputan como servidores públicos, entre otros, los representantes de elección popular y quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Ahora bien, toda vez que el notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, no puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección popular ni

La materia notarial en México está legislada en cada una de las 32 entidades federativas. Cada una tiene su propia legislación notarial. En el Distrito Federal y en Jalisco, el Notario Público no es funcionario público, más bien es, de acuerdo al artículo 42. LNDF.- “Notario es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la Voluntad de las personas que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza jurídicas a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría.

El notario conserva los instrumentos en el protocolo a su cargo, los reproduce y da fe de ellos.

Actúa también como auxiliar de la administración de justicia, como consejero, árbitro o asesor internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales relativas.” Y de acuerdo al Artículo 3º. De la LN Jal.- Notario Público es el profesional del derecho que desempeña una función pública, investido por delegación del Estado a través del Titular del Poder Ejecutivo, de la capacidad de formalizar y dar fe para hacer constar hechos, actos y negocios jurídicos a los que se quiera o deba dar autenticidad y seguridad jurídica.

También le faculta intervenir como mediador, conciliador o árbitro, y en concurrencia con los órganos jurisdiccionales, en el trámite de negocios de jurisdicción voluntaria y de los procedimientos sucesorios en tanto no se suscite controversia entre los interesados, en los casos en que expresamente la Ley lo autorice.

El notario podrá ser depositario de bienes, disposiciones testamentarias, acciones de empresas mercantiles y de otros títulos valor, que sean consecuencia de los actos jurídicos otorgados ante él, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de esta Ley, y en los casos que prevea el Reglamento.”

-. Garantizando la libre prestación de un consentimiento debidamente informado protege la dignidad de la persona, los

se halla dentro de la administración pública estatal o municipal, además de que el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática.

Acción de inconstitucionalidad 11/2002. Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. 27 de enero de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el veintiocho de junio en curso, aprobó, con el número 75/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiocho de junio de dos mil cinco.”

Texto completo de la ejecutoria

derechos inviolables y el libre desarrollo de la personalidad, con especial atención a aquellos necesitados de una mayor protección, como, por ejemplo, los extranjeros, los inmigrantes, los disminuidos físicos, las personas de la tercera edad, los menores, las mujeres, y los consumidores;

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa?

Más bien se refiere a la imparcialidad que debe regir su actuación. Artículo 45. I y VII LNDF y Artículo 7.- IV LNJal.

-. Hace realidad el derecho de toda persona a la **tutela judicial** ofreciendo vías alternativas de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje, o asumiendo competencias no jurisdiccionales que tradicionalmente se le han atribuidos a otros órganos del Estado, descongestionando los juzgados y permitiendo una rápida, eficaz y barata solución de dirimir los conflictos;

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa?

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 33 VI, VII y VIII de la LNDF y por el artículo 3 párrafo 2º LNJal el Notario si puede ser Arbitro o Mediador.

-. **Facilita el pago de impuestos** informando sobre aquellos que guardan relación con los documentos que autoriza, haciendo realidad el principio de que todos contribuyamos al sostenimiento de los gastos públicos;

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa?

La LNDF no habla exactamente de la función recaudadora del Notario, pero habla de que puede recibir en depósito dinero destinado al pago de impuestos y contribuciones de las escrituras por él autorizadas, véase artículo 45 IX a, en el caso de la LNJal habla de la prohibición del notario a expedir testimonios si no se hubieren cubierto los impuestos o contribuciones por el acto jurídico que constare en el testimonio, so pena de convertirse en Responsable solidario a favor de la Hacienda Pública, véanse artículos 39 XVI y 101.

Concretamente el Código Fiscal de la Federación, en lo sucesivo CFF (Legislación de orden Federal y no estatal, establece en su artículo 27 la obligación de que cuando el Notario deba avisar de

las operaciones a la Hacienda Federal, estos avisos deberá darlos a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera celebrado la operación. En el artículo 73 III 2º párrafo, del CFF se establece que “Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios o empleados públicos o a los **notarios** o corredores titulados, los accesorios serán, a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes.” Por su parte la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en lo sucesivo LISR, en su artículo 154 (Ingresos por enajenación de inmuebles) 3º párrafo establece “En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo. Dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.” En el caso del artículo 154 BIS (con independencia de lo dispuesto por el 154, reglas para enajenación de terrenos, construcciones o terrenos y construcciones) 3º Párrafo de la LISR se establece “En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se refiere este artículo bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que se refiere el mismo en el mismo plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 154 de esta Ley.” El artículo 157 (ingresos por adquisición debienes) 2º párrafo de la LISR se establece que: “En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de que se trate se determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y

demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en las oficinas autorizadas. Asimismo, dichos fedatarios, a más tardar el día 15 de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.” Y en su artículo 189 (ingresos por enajenación de inmuebles hecha por residentes en el extranjero) 3º párrafo, de la LISR, a la mitad establece “Los notarios, jueces, corredores y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, lo harán constar en la escritura y lo enterarán mediante declaración en las oficinas autorizadas que correspondan a su domicilio, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firma la escritura. En los casos a que se refiere este párrafo se presentará declaración por todas las enajenaciones aun cuando no haya impuesto a enterar. Asimismo, dichos fedatarios, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.” La Ley del Impuesto al Valor Agregado, en lo sucesivo LIVA en su artículo 33 2º párrafo establece “Tratándose de enajenación de inmuebles por la que se deba pagar el impuesto en los términos de esta Ley, consignada en escritura pública, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, en la oficina autorizada que corresponda a su domicilio. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable en el caso a que se refiere el artículo 1o.-A, fracción I de esta Ley.”

-. Defiende el **derecho a la propiedad** y que ésta cumpla la función social que ha de atender,

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa? El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo **CPEUM** establece que la propiedad originaria respecto de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional corresponden originariamente a la Nación, y que tiene la facultad de transmitir estas a particulares, constituyendo la propiedad privada, teniendo en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,

en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

– Colabora en la protección del **medio ambiente y de los recursos naturales**, en la conservación del patrimonio artístico y cultural,

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa? Respecto del medio ambiente, a).- el párrafo 5º del artículo 4º de la **CPEUM** establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”; b).- el párrafo 6º del artículo 25 de la **CPEUM** establece que “Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”; c).- el artículo 73 de la **CPEUM** que establece las facultades del Congreso Federal, establece en su fracción **XXIX-G**. la facultad “para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”, y dentro del artículo 122 de la **CPEUM** también se establece la facultad para la Asamblea de Representantes, para “legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica” y Respecto a los recursos naturales, el párrafo 6º del artículo 27 de la **CPEUM** establece que corresponde a la Nación el dominio de forma inalienable, y que la extracción y explotación podrá concederse únicamente mediante concesión.

– Garantiza el **derecho a una vivienda digna** y adecuada y a la utilización del suelo sin especulación,

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa? Respecto del derecho a una vivienda digna, el párrafo 6º del artículo 4º de la **CPEUM** establece que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” Y además se establecen las bases en el artículo 123 de la **CPEUM** para la creación de un Fondo Nacional de Vivienda.

– Impulsa el **desarrollo del sector económico**, la modernización de la agricultura, la ganadería, la pesca, la artesanía, la industria y el comercio: creación rápida de sociedades, reducción de trámites y de tiempo

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa? El párrafo 2º del artículo 27 de la **CPEUM**, establece que “se dictarán las medidas necesarias ... para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural”. Respecto de la creación rápida de empresas, aunque no esté garantizada constitucionalmente, actualmente es posible constituir una sociedad mercantil desde que el cliente proporciona los datos al notario, y este conforma el proyecto, solicita la autorización para la denominación o razón social del nombre, lo somete a consideración de las partes, lo firman, da el alta ante la Hacienda pública de la misma y genera la inscripción en el Registro Público de Comercio, en menos de 4 horas. Y respecto a la reducción de trámites y tiempos, existe la Comisión Federal de Mejora Regulatoria COFERMER,³ que es un órgano administrativo desconcentrado, con autonomía técnica y operativa, sectorizado a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México.

– Vela por la protección de los **bienes de dominio público**, del espacio aéreo, de las costas, playas, de las aguas, de los montes y zonas especiales

Diga si es así en su legislación nacional. ¿Cómo se expresa? Respecto de los Bienes de Dominio Público, hay un régimen especial para

³ Según información publicada en la página <http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=29> La COFERMER fue creada en el año 2000 mediante reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. El mandato de la COFERMER es promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad.

Tiene las siguientes funciones:

1. Revisa el marco regulatorio nacional, diagnostica su aplicación y elabora propuestas legislativas y administrativas, así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos.

2. Analiza y dictamina las regulaciones que pretenden emitir las dependencias y los organismos descentralizados del Gobierno Federal, a fin de garantizar que su impacto, en términos de beneficios sociales, sean mayores a sus costos.

3. Administra el Registro Federal de Trámites y Servicios que es un inventario de los trámites de la Administración Pública Federal. Las Dependencias y Organismos Descentralizados no pueden aplicar trámites adicionales a los inscritos en este registro ni aplicarlos en forma distinta a lo que se establezca en el mismo.

Brinda asesoría técnica en materia de mejora regulatoria a los estados y municipios del país, misma que consiste en promover leyes de mejora regulatoria locales, adecuaciones a reglamentos y bandos locales, sistemas de apertura rápida de empresas y consejos estatales y municipales de mejora regulatoria.

afectarlos, desafectarlos, transmitirlos, etc. Únicamente ante los Notarios del Patrimonio Inmueble Federal,⁴ en un protocolo especial se pueden hacer estos actos.

La colaboración del notario tiene su razón de ser y fundamento en el documento notarial que el notario ha de autorizar o ha autorizado ya. El notario:

– **Informa a las Autoridades competentes del próximo otorgamiento** de la escritura; En algunos casos.

– **Exige el cumplimiento de** notificaciones, autorizaciones y condiciones especialmente necesarias para preservar los valores, derechos e intereses a los que aludimos en el punto I y asegurar la legalidad, la validez y eficacia del acto o negocio que encierra el documento. SI

– **Se niega o suspende a la autorización del documento** Hay casos donde puede otorgarse el instrumento, dando el aviso de la irregularidad advertida, y hay casos donde no se puede otorgar el instrumento.

⁴ De acuerdo a lo establecido por la Ley General de Bienes Nacionales, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de Nombrar a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal que tendrán a su cargo la formalización de los actos jurídicos cuando así se requiera, por ejemplo, de los que son propiedad de la federación o las entidades federativas, por ejemplo: el artículo 96 de la misma ley establece: "**ARTÍCULO 96.**- Los actos jurídicos relacionados con inmuebles en los que sean parte la Federación y que en los términos de esta Ley requieran la intervención de notario, se celebrarán ante los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal que nombrará la Secretaría, entre los autorizados legalmente para ejercer el notariado, cuya lista hará pública.

Los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal llevarán protocolo especial para los actos jurídicos de este ramo, y sus respectivos apéndices e índices de instrumentos y con los demás requisitos que la ley exija para la validez de los actos notariales. Estos protocolos especiales serán autorizados por las autoridades competentes de las entidades federativas, cuando así lo exijan las leyes locales aplicables, y por la Secretaría. Los notarios deberán dar aviso del cierre y apertura de cada protocolo especial a la Secretaría y remitirle un ejemplar del índice de instrumentos cada vez que se cierre un protocolo especial. Esta dependencia podrá realizar revisiones o requerir información periódica sobre los protocolos especiales, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

En el caso de ausencia de los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, quienes los suplan en términos de la legislación local respectiva, sean o no Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, podrán autorizar, tanto preventiva como definitivamente, un instrumento que se encuentre asentado en el protocolo respectivo, así como expedir testimonios de los que estén asentados dentro del protocolo, pero no podrán asentar nuevos instrumentos. Si el suplente ejerciere las facultades de autorización que estep árrafo le concede, de manera previa deberá informar a la Secretaría que se encuentra a cargo de la suplencia, fundando y motivando la misma en los términos de su respectiva legislación.

La Secretaría emitirá los lineamientos que regulen aspectos específicos respecto del otorgamiento de actos relacionados con inmuebles federales, que deberán atender los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal."

– **Informa a la Administración competente del otorgamiento** del documento: sea para que ésta pueda hacer las comprobaciones necesarias, sea para que se practiquen las inscripciones o registros previstos legalmente, sea para evitar trámites, desplazamientos y costes a los otorgantes del documento. Si

– Colabora con la Administración en los **procedimientos** que ésta tiene para cumplir sus fines.

Comente si es así en su legislación nacional y, si no, cuál es la situación. Si, ya ha quedado contestado con anterioridad.

III. La colaboración del notario no es un acto voluntario, sino que, por regla general, le viene impuesto por ley, constituye para él una obligación o carga impuesta por ser parte integrante de la Administración, de la que no puede abstraerse sin incurrir en responsabilidad. La condición de autoridad público/oficial público/funcionario público conlleva tal carga de cooperación.

Cada vez son más los actos de colaboración del notario con la Administración.

– *¿Qué consideración merece para su legislación nacional la figura del notario, además de la de profesional de derecho?* En algunos estados el Notario Público no es parte de la Administración Pública, sin embargo si es un profesional del derecho, que tiene la función de dar fé, delegada por el poder ejecutivo del estado. *¿Lo califica expresamente de funcionario público, oficial público, de profesión reglada, de profesión de interés general, qué otra expresión utiliza para expresar tal idea?*

– *¿Cuáles son las palabras exactas que utiliza para referirse al notario? ¿En qué texto se regula?* Ya ha quedado respondido con anterioridad

– *¿Destaca su legislación nacional la idea del notario como colaborador de la Administración pública? ¿En qué texto? ¿cuáles son sus palabras?* Ya ha quedado respondido con anterioridad

IV. Ejemplos de colaboración con la Administración pública

La colaboración notarial con la Administración se muestra en numerosos campos o ámbitos, variando estos de una a otra legislación nacional, así como la forma y la intensidad de colaborar.

Veamos algunas de las áreas en las que el notario colabora con la Administración, cómo lo hace y cuál es el uso que para ello hace, o podría hacer de las nuevas tecnologías:

1.- BLANQUEO DE CAPITAL Y FRAUDE FISCAL:⁵

El blanqueo es un proceso que consiste en ocultar el origen ilegal de los fondos procedentes de fuentes delictivas; su fenomenología se despliega en una organización de técnicas para sustituir, sin despertar sospechas, el dinero de procedencia ilícita por dinero aparentemente limpio, tras haber borrado todo rastro de su procedencia delictiva. Para ello, el blanqueador emprende un camino de sustituciones constantes, inicialmente del mismo bien que es el fruto del acto delictivo por otro, y luego de este último por otros más, tantas veces como sean necesarias para ocultar su origen (washing cycles), empezando por la introducción del dinero en metálico “sucio” en el circuito financiero (placement), la larga fase de la transformación (conversion), planificada a través de una fragmentación eventual que dispersa la unidad de los recursos empleados a través de permutas y combinaciones (layering, o sea, “estratificación para disimular”, conversion), tanto a través de los circuitos financieros y bancarios tradicionales como de los menos convencionales, como casinos o joyeros, o incluso —pero sólo al principio— sirviéndose de correos y contrabandistas, con el fin de lograr su (re)incorporación a la economía legal (integration) y borrar las huellas del paper trail, después del “blanqueo” (heavy soap).

En cierto sentido, las fases de la financiación del terrorismo (money dirtying) son lo contrario del proceso de blanqueo, ya que empiezan con la captación de recursos tendencialmente legítimos (como las aportaciones de simpatizantes a la causa, que no son fondos procedentes de delitos) mediante un recaudador principal (“collection”), que luego los traspasa u oculta (“transmission, dissimulation”), intentando esconder las finalidades reales de los movimientos de capitales, empleando sistemas de pago subterráneos o paralelos (underground or parallel banking systems) alternativos al circuito bancario, como el sistema Hawala; finalmente, el empleo (“use”) del dinero u otros bienes para financiar acciones terroristas.

Las normativas vigentes, cuando las hay, prevén un contexto internacional de prevención/represión del blanqueo y financiación del terrorismo que se rige por unos principios y sistemas específi-

⁵ Este apartado y su cuestionario está directamente “plagiado” de los dos magníficos trabajos realizados por mis amigos y compañeros notarios, D. Cesare Licini (de Pesaro en Italia), sub-coordinador internacional del tema “Blanqueo de capitales” del último Congreso de la UIN celebrado en Marrakesh en 2010, y D. Enrique Brancós Núñez (de Girona en España), presidente y ponente del tema sobre esta materia confeccionado para la CAE y que se puede leer publicado en la Intranet de la UIN. A ambos les agradezco su autorización y ayuda

cos, gestionado por autoridades específicas y agencias nacionales, comunitarias e internacionales que exigen que, ante todo, los nuevos sujetos enrolados en estas arquitecturas anti-blanqueo estén informados acerca de las características y necesidades del escenario, para ponerles en condiciones de cumplir de forma adecuada —con lealtad, pero conociendo perfectamente los límites— con las obligaciones que van a tener que encañar.

Hoy en día, el marco del sistema de prevención va más allá del sistema financiero original, abarcando muchos otros tipos de actividades profesionales, que comparten el hecho de ofrecer unas prestaciones que bien pudieran aprovecharse para blanquear dinero (sucio, puesto que es de procedencia ilícita, o “ensuciado” porque se ha entregado para financiar el terrorismo), entre las que se cuentan abogados, notarios, contables y asesores financieros obligados a cumplir ciertas reglas en materia de identificación de los clientes, registros y denuncia de operaciones sospechosas.

En la actualidad en México, existe una iniciativa en proceso de discusión y aprobación en el Congreso de la Unión sobre un proyecto de Decreto por el que se expide la LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, de cuyas disposiciones se procederá a la contestación del cuestionario planteado.

Explique su legislación nacional, su experiencia y propuestas o sugerencias de reforma al hilo del siguiente cuestionario:

1.1. ¿Existe en su país **alguna normativa vigente** relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo? ¿Cuál? ¿Es suficiente? ¿Es satisfactoria? Y si no, ¿por qué? no hay nuevas disposiciones normativas vigentes pero de conformidad con la iniciativa de ley antes aludida conforme a la cual se contestará el presente cuestionario.

1.1.1. ¿Es directamente aplicable a los notarios? En la iniciativa de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se considera expresamente como Actividades Vulnerable (y por tanto objeto de identificación) la prestación de servicios de fe pública en tratándose de:

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda;

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable;

c) La constitución de toda clase de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de toda clase de personas morales;

d) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso;

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.

2.2.2. ¿Qué otros sujetos son destinatarios de sus normas, cuáles son las principales diferencias con respecto del régimen previsto para los notarios? Si

1.1.2. entidades bancarias; Si

1.1.2.1. entidades financieras; Si

1.1.2.2. Personas jurídicas o físicas, cuando actúan en el ejercicio de su actividad profesional; Si

1.1.2.3. Censores de cuentas, contables externos y asesores fiscales; Si

1.1.2.4. Profesionales liberales del mundo jurídico; Si

1.1.2.4.1. la compraventa de bienes inmuebles o empresas; Si

1.1.2.4.2. la gestión de dinero, instrumentos financieros u otros bienes de los clientes; Si

1.1.2.4.3. apertura o administración de cuentas bancarias, libretas de ahorro o cuentas de valores; Si

1.1.2.4.4. la organización de las aportaciones necesarias para constituir, administrar o dirigir sociedades; Si

1.1.2.4.5. la constitución, dirección o administración de trusts, sociedades o estructuras análogas; Si

1.1.2.5. prestadores de servicios relacionados con sociedades o trusts distintos de los contemplados antes; Si

1.1.2.6. agentes de la propiedad inmobiliaria; Si

1.1.2.7. otras personas físicas o jurídicas que negocien con bienes, sólo cuando el pago se efectúe al contado, y por un importe igual o mayor a una determinada cifra (decir cuál), independientemente de que la transacción se lleve a cabo con una sola operación o con varias operaciones vinculadas entre sí; Si

1.1.2.8. establecimientos de juego de azar. Si

La diferencia principal con respecto al régimen previsto para los notarios es en relación con las actividades que en cada caso se consideran vulnerables.

1.2. ¿Qué obligaciones de colaboración impone al notario?

1.2.1. ¿Debe **identificar** a sus clientes? Si

1.2.1.1. ¿Mediante qué documentos: documento nacional de identidad, cédula de ciudadanía, pasaporte, tarjeta de residencia, carnet de conducir, otros? Solamente con base en documentos de identificación oficial y adicionalmente el notario deberá recabar copia del documento de identificación respectivo.

1.2.1.2. ¿Debe conservar el documento de identificación: en qué forma y soporte y durante qué plazo? Si debe conservarse por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de celebración de la Actividad Vulnerable. La iniciativa permite conservar la información de manera física o electrónica, a elección del Notario.

1.2.1.3. ¿Está excluido el Notario de la obligación de identificar al cliente o al titular real cuando esté evaluando la posición jurídica de su cliente o desempeñando su misión de defender o representar a su cliente en procesos judiciales o en relación con ellos? ¿Debe el notario controlar al “titular real”, o sea, a la persona física que realmente está celebrando el negocio jurídico? ¿Existe en su ordenamiento la figura subjetiva de la “persona física verdadera titular en última instancia”, entendida como persona física que posee o controla al cliente, o aquella por cuya cuenta se lleva a cabo una operación o actividad, en última instancia (*dernier lieu*; ultimately; ultimate beneficiary, directly or indirectly)? Para GAFI (40 Col., glosario), que ha introducido el término equivalente “beneficiario real” (beneficial owner), esta figura designa a la persona física que, en la punta de la pirámide, posee o controla al cliente, y/o a la persona para la que se efectúa la transacción. Esto incluye por igual a las personas que ejercen en última instancia un control real sobre una persona moral o una construcción jurídica (Col. 11, 15 a 18). En el sistema combinado de las dir. 2005/60/CE y 2006/70/CE, se entiende por beneficiario real a la persona física que tiene expectativas de apropiarse de los beneficios y controlarlos, en virtud de un título directo o indirecto, de carácter contractual-gestorial, pero en todo caso jurídica, que constituye una posición “ajena” al derecho de quien aparece como titular. La figura la reconoce la iniciativa como “Dueño Beneficiario” y en la misma se contempla la obligación para el Notario de solicitar al cliente o usuario que participe en la celebración de Actividades Vulnerables información acerca de si se

tiene conocimiento de la existencia del “Dueño Beneficiario” y en su caso, se exhiba la documentación oficial que permita identificarlo, si esta obrare en su poder y en caso contrario deberá declarar que no cuenta con ella el compareciente bajo protesta, y el notario actuara asentando en el instrumento la declaración del compareciente. El notario no queda excluido de la obligación de identificar al cliente o al “Dueño Beneficiario” en ningún caso.

1.2.1.4. ¿Cuáles son los poderes y fuerzas a disposición del profesional para aceptar dicha condición? Ninguna. El notario queda totalmente expuesto.

1.2.1.5. ¿Es preciso o posible considerar como suficiente la información contenida en los registros o declaraciones? El notario deberá incluir dentro del cuerpo de las escrituras que contengan actos considerados como Actividades Vulnerables una serie de certificaciones y menciones relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, el Notario tiene obligación de identificar a los otorgantes, de leer (en algunos Estados no es obligación del Notario leer a las partes el instrumento) y explicar el contenido del instrumento y sus consecuencias legales y de incluir certificación respecto del cumplimiento de obligaciones previstas en leyes especiales, como son las de tipo fiscal, extranjería, migración, etc. Las obligaciones del Notario se aplican a todos los instrumentos en que interviene. Hay variantes dependiendo del acto que se otorgue y en el caso específico del lavado de dinero, habría diversas obligaciones (ya establecidas en el trabajo) en tratándose de actos identificados como vulnerables por la propia ley.

1.2.1.6. ¿El profesional tiene la obligación de verificar la coherencia e idoneidad del medio elegido para identificar al verdadero titular, graduado según el nivel de concreción del riesgo? En la iniciativa la obligación del notario se reduce a solicitar al cliente o usuario que participe en la celebración de Actividades Vulnerables información acerca de si se tiene conocimiento de la existencia del “Dueño Beneficiario” y en su caso, se exhiba la documentación oficial que permita identificarlo, si esta obrare en su poder y en caso contrario deberá declarar que no cuenta con ella.

1.2.1.7. ¿Puede elegir alternativamente entre:

1.2.1.7.1. recurrir a los registros públicos, listas, actas o documentos públicos que contengan información sobre los verdaderos titulares; No se contempla esta posibilidad.

1.2.1.7.2. solicitarles los datos pertinentes a sus clientes; Si

1.2.1.7.3. conseguir información de otras formas? No se prevé.

1.2.1.8. En caso de personas jurídicas-clientes, ¿se cumple con la obligación de saber quién es el verdadero titular cuando se conoce la estructura de la propiedad y del control de la misma? Solamente bajo la declaración del cliente o usuario del servicio y con base en los documentos oficiales que éste exhiba al notario.

1.2.1.9. ¿Conocer la estructura de la propiedad y del control del cliente-persona jurídica significa que el sujeto está obligado a llegar de manera autónoma a la estructura subjetiva que emerge de la lectura de los estatutos de la entidad? La alternativa del cliente o usuario es declarar la identidad del “Dueño Beneficiario” y acreditarla con documentación oficial o declarar que no cuenta con la información respectiva.

1.2.1.10. ¿Qué pasa si, un vez efectuados los controles, el profesional no puede, ni siquiera mediante pesquisas en los registros públicos, es decir, con los medios de que dispone, lograr identificar con certeza a la persona física que es la verdadera titular? ¿Deberá el notario abstenerse en este supuesto? Solamente en caso de que el cliente o usuario declare que no cuenta con la información respectiva. No hay obligación de dar seguimiento a la identidad o actividades del “Dueño Beneficiario”.

1.2.1.11. ¿Existe algún principio que limite la acción que el profesional tiene la obligación de llevar a cabo, dentro de los límites de la sostenibilidad y la proporcionalidad? Se limita a la declaración en un sentido u otro por parte del cliente usuario.

1.2.1.12. ¿Está sujeto el profesional a alguna obligación relacionada con la comprobación adecuada de la clientela, a calibrar en función del riesgo asociado a:

- tipo de cliente, Solo cuando exista una Relación de Negocios.
- relación de negocios, En estos casos se deberá recabar la información sobre la actividad u ocupación del cliente.
- producto o transacción de que se trata? Solamente cuando se otorguen actos identificados como Actividad Vulnerable.

1.2.1.13. ¿Están incluidas las siguientes actividades?

- a) identificar al cliente y comprobar su identidad; SI
- b) identificar al verdadero titular y adoptar las medidas adecuadas y proporcionadas al riesgo para comprobar su identidad, con el fin de que la entidad o persona sujetas a la presente directiva estén seguras de saber quién es el verdadero titular SI

1.2.2. ¿Debe el notario identificar los **medios de pago** empleados? ¿En todas las operaciones? ¿En cuáles sí? ¿Cómo se controlan?

En operaciones con valor igual o mayor a \$1,000,000.00 (Un millón de pesos mexicanos) el notario deberá identificar la forma en que se paguen las obligaciones que de ellos deriven. En caso de que la operación sea de valor inferior, bastara la declaración bajo protesta de los clientes. En la iniciativa se prohíbe el uso de efectivo (moneda local o extranjera) y metales preciosos para el pago de obligaciones derivadas de los actos otorgados en el instrumento notarial como sigue: (solo se incluyen contratos que deban constar en escritura publica).

- a. Derechos reales sobre inmuebles por \$1'000,000.00 o más.
- b. Derechos reales sobre acciones o partes sociales de personas morales por \$200,000.00 o más.
- c. Derechos personales de uso o goce sobre inmuebles por \$200,000.00 o más.

1.2.3. ¿Debe el notario **comunicar** los datos de la **operación realizada**? ¿En qué forma: anónima o identificándose, cada cuántos días, per se o a solicitud de parte, en qué forma por escrito, confeccionando informes, ficheros informáticos, cómo se envían, directamente a la Administración o a través de órganos corporativos? Si, el notario debe comunicar los datos de la operación realizada identificándose y sin que medie solicitud de parte, de forma electrónica, cuando la operación se encuentra dentro de aquellas por las que se debe informar, que son:

– En los casos de transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles (salvo cuando las garantías se constituyan a favor de instituciones del sistema financiero o de organismos públicos de vivienda), siempre y cuando el valor mayor de entre el precio pactado, el valor catastral y el valor comercial del inmueble sea igual o superior a la cantidad de \$500,000.00 (quinientos mil pesos, moneda nacional)

– Siempre en el caso de otorgamiento de poderes con facultades para actos de administración o de dominio otorgados con el carácter de irrevocables.

Los avisos deben contener:

- datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable.
- Datos generales del cliente o usuarios o, en su caso, del Beneficiario Controlador
- Descripción de la Actividad Vulnerable sobre la que se dé el aviso.

Dicho aviso podrá presentarse por los notarios mediante el mismo sistema electrónico por el que se informan o presentan

avisos de conformidad con las disposiciones de tipo fiscal federal. (En México, este sistema se denomina DECLARANOT).

El aviso debe presentarse a más tardar el día diecisiete del mes inmediato posterior al que se realice la operación que sea objeto del aviso y el notario debe conservar la información por un plazo de cinco años.

El aviso podrá ser presentado por conducto de una entidad colegiada, misma que deberá reunir ciertos requisitos legales. La iniciativa de ley se refiere a que el notario informe a la entidad colegiada para que ésta condense toda la información recibida de todos los notarios y la proporcione a la autoridad.

1.2.4. ¿Existen **otros deberes u obligaciones**, como, por ejemplo, los siguientes?

1.2.4.1. obligación de denunciar la sospecha de blanqueo ¿cómo? NO

1.2.4.2. obligación de denunciar la infracción de las limitaciones de uso del dinero en metálico ¿cómo? En los casos de constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles por una cantidad igual o superior a la cantidad de \$1,000,000.00 (un millón de pesos, moneda nacional) el notario debe identificar la forma en que se paguen las obligaciones que de ellos deriven. En caso de que el valor sea inferior a la cantidad antes referida o cuando el acto u operación haya sido pagado total o parcialmente con anterioridad a la firma del instrumento respectivo, bastará la declaración bajo protesta de decir verdad que hagan los clientes o usuarios. (En términos del artículo 165 de la LNDF la declaración falsa ante notario se sanciona penalmente. Por ello, en las afirmaciones bajo protesta de decir verdad se entiende que el declarante sabe que si su declaración es falsa, comete un delito).

1.2.4.3. obligación de negarse o abstenerse de prestar sus servicios para actos sospechosos de estar relacionados con el blanqueo El notario debe abstenerse sin responsabilidad para él, de llevar a cabo el acto o la operación de que se trate, cuando los clientes o usuarios se nieguen a proporcionar la información o documentación requeridas de acuerdo con la ley.

1.2.4.4. obligación de buscar información acerca de la naturaleza y finalidades previstas del negocio NO

1.2.4.5. obligación de mantener un control constante a lo largo de toda la relación de negocios, en particular sobre las transacciones efectuadas mientras dure dicha relación, con el fin de garantizar que dichas transacciones sean compatibles con el conocimiento que

tiene el obligado de su cliente, de las actividades comerciales del mismo y de su perfil de riesgo, prestando atención en caso necesario al origen de los fondos y manteniendo actualizados los documentos, datos o informaciones en su poder, El notario debe conservar toda la información por un plazo de cinco años.

1.2.4.6. obligación de cumplir la orden de abstenerse. ¿De quién puede venir? ¿en qué casos? Si, en los términos expresados.

1.2.4.7. ¿Existe la obligación de conservación de datos y documentación? ¿Cómo se materializan? Si mediante archivos electrónicos o materiales, por cinco años.

1.3. ¿En qué **responsabilidad** puede incurrir el notario: civil, penal, administrativa? ¿Cuándo **prescribe** esa responsabilidad? ¿Cuáles son las **sanciones** que conllevan? El notario puede incurrir en responsabilidad civil (multas de cuantía elevada), administrativa (sanciones de amonestación, multa, suspensión o cesación de funciones) y penal (prisión), si se atrasa en el cumplimiento de sus obligaciones, si reincide en ello, si incumple con sus obligaciones, si falsea la información proporcionada y si no guarda la debida confidencialidad.

1.4. La normativa vigente en los países miembros de la UE define como blanqueo las siguientes acciones, en caso de cometerse de forma intencionada:

a) la conversión o traspaso de bienes, efectuados con conocimiento de que los mismos proceden de una actividad delictiva o de la participación en dichas actividades, con el fin de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes en cuestión o de ayudar a cualquier persona que esté inmiscuida en dichas actividades a escapar de las consecuencias jurídicas de sus acciones;

b) ocultar o disimular la verdadera naturaleza, procedencia, ubicación, disposición, movimiento, propiedad de los bienes o de los derechos sobre los mismos, efectuados teniendo conocimiento de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en dicha actividad;

c) adquirir, poseer o utilizar bienes teniendo conocimiento, en el momento de recibirlos, de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o de una participación en dicha actividad;

d) participar en una de las acciones contempladas en los apartados anteriores, asociarse para cometer dichas acciones, el intento de perpetrarlas, el hecho de ayudar, instigar o aconsejarle a alguien que cometa la acción o el hecho de facilitar que se cometa.

Y como “financiación del terrorismo”, proporcionar o recaudar fondos de cualquier manera, con la intención de utilizarlos para cometer algún delito de terrorismo.

El conocimiento, intención o finalidad, que deben constituir un elemento de los actos contemplados en los apartados 2 y 4, pueden deducirse de las circunstancias de hecho objetivas.

¿Los supuestos contemplados en su ordenamiento corresponden a estas definiciones? ¿O difieren? ¿Y cómo? No hay definiciones específicas. La iniciativa de Ley regula actividades que se consideran vulnerables, pero no define los conceptos referidos.

1.5. ¿Formula la ley criterios técnicos que enumeren supuestos de riesgo o, en su caso, de blanqueo? SI, específicamente, por el uso de dinero en efectivo, divisa o metales y joyas preciosas. Hay un catálogo de operaciones vulnerables y hay prohibiciones específicas de uso de efectivo o metales preciosos.

1.6. ¿La ley señala *nominatim* operaciones complejas, o de cuantía elevada, o de naturaleza infrecuente, o poco habituales, que puedan considerarse particularmente probables de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo? SI, solo se mencionan los actos que deban constar en escritura pública.

a. Derechos reales sobre inmuebles por \$1'000,000.00 o más.

b. Derechos reales sobre acciones o partes sociales de personas morales por \$200,000.00 o más.

c. Derechos personales de uso o goce sobre inmuebles por \$200,000.00 o más.

1.7. **Supuestos sospechosos:**

1.7.1. ¿hay indicios o elementos objetivos que permitan sospechar? ¿Son de público conocimiento o son reservados, y en este caso, quién los conoce? ¿Colaboran los organismos corporativos notariales en esa labor notarial? ¿Existe un catálogo de elementos de hechos objetivos que directamente impliquen sospecha de actividad de blanqueo? ¿Contiene un catálogo o detalle de actividades del Notario sujetas a control? ¿Respeta las legales o las amplía o restringe? ¿En que aspectos? ¿Se contemplan las “sospechas” como supuestos de adopción de medidas de diligencia debida? ¿Se establecen supuestos objetivos de sospecha? ¿cuáles? SI, en los términos antes expuestos.

1.7.2. ¿Cómo debe actuar ante un caso de sospecha? ¿Debe denunciar, informar previamente el notario, o pedir autorización?. ¿Cómo informa el notario? Tiempo, forma (por escrito, mediante

informes, confeccionando índices o ficheros informáticos que se envían por esa misma vía, otros, ...). El notario debe recabar información, dar avisos y conservar la información en los casos en los que se han mencionado dichas obligaciones con anterioridad.

1.7.3. ¿Lo hace cada notario individualmente o existe una organización corporativa? La iniciativa permite que el Notario pueda cumplir todas sus obligaciones en todos los casos en forma personal o mediante la entidad colegiada, si ésta cumple una serie de requisitos legales.

1.7.4. ¿Hay formación continuada –enseñanza o puesta al día del notario- en esta materia? ¿Se encargan de ellos los colegios? El notario debe estar al día de cualquier cambio en la normatividad y puede cumplir sus obligaciones de modo individual o colegiado, si la entidad cubre los requisitos legales necesarios. El notario y sus dependientes deben capacitarse por sus propios medios.

¿Está prevista la formación de los empleados? ¿Cómo? ¿Hay disposiciones concretas referidas a esa formación? ¿En qué consisten? NO.

1.8. ¿Existen casos en que las medidas a adoptar difieran, dependiendo, por ejemplo, de la mayor o menor gravedad del riesgo afrontado (risk-sensitive basis), debiendo en unos casos ser más rigurosos los controles y en otros más suaves de lo normal? Distinguiríamos así tres niveles de control diferentes:

– un nivel estándar predeterminado (control adecuado “ordinario”),

– un nivel simplificado de control, por razón del tipo de operación o de cliente (simplified customer due diligence)

– un nivel reforzado de control, también por razón del tipo de operación o de cliente (enhanced customer due diligence) NO, los casos que motivan obligaciones para el notario son los expresamente enunciados en la iniciativa de Ley.

1.8.1. control ordinario. Siempre en los casos específicamente previstos.

1.8.1.1. ¿En qué supuestos son obligatorias unas medidas de diligencia debida? No se especifican medidas adicionales por actos “sospechosos” a juicio del notario. ¿Cuáles son éstas?

1.8.1.2. Entre las medidas de diligencia debida:

1.8.1.2.1. ¿Existe la obligación de “conocer y comprender la estructura de propiedad –os sea al verdadero propietario- y practicar el control de ese titular real –averiguar frente al titularidad formal o testaferrero quien es el real-? Solo en el supuesto de que existan

los elementos o la información del propio cliente en el sentido de que existe un Beneficiario Controlador.

1.8.1.2.2. ¿Existe la obligación de obtener información sobre el propósito del presunto blanqueador? Solamente la información que se ha referido en el presente trabajo.

1.8.1.2.3. ¿Existe la obligación de efectuar el seguimiento continuo de las transacciones efectuadas? No.

1.8.1.2.4. ¿Debe demostrar el Notario que las medidas adoptadas tienen el alcance adecuado en vista del riesgo de blanqueo? No.

1.8.1.3. ¿Existen medidas simplificadas de diligencia debida? ¿Cuáles? No hay “calificación” o “clasificación” de las medidas que se imponen al notario.

1.8.1.4. ¿Se han recogido en la ley medidas reforzadas de diligencia? ¿Cuáles? No.

1.8.1.4.1. ¿En relación a clientes no físicamente presentes? ¿En qué términos? No.

1.8.1.4.2. ¿Se han recogido en la ley medidas reforzadas de diligencia en relación a las personas del medio político, o sea, los integrantes de partidos políticos-? ¿En qué términos? No.

1.8.1.4.3. ¿Se recoge en la ley el concepto o la idea de “transacciones propicias al anonimato”? ¿Se hace algún catálogo de transacciones propicias al anonimato? No.

1.9. ¿Cabe el cumplimiento de las normas de diligencia debida por un tercero? ¿Con qué límites? No.

En el caso de que su legislación considere al notario no como un sujeto pasivo directo, obligado a cumplir ciertas obligaciones, sino que lo considere como un tercero ¿debe remitir los datos relativos a comprobación de identidad y demás documentación pertinente sobre identidad del cliente o titular real? ¿Colisiona con el secreto de protocolo? No se considera que el notario viola el secreto profesional cuando cumple con las obligaciones que esta iniciativa de Ley le imponen.

1.10. ¿Existe tipificado en su ordenamiento jurídico el delito fiscal? Si.

1.11. Terminología

1.11.1. ¿Mantiene la norma juicios de valor o expresiones inciertas y relativas, tales como: operaciones “complejas”, riesgo “extraordinariamente elevado”, cliente u operación “no habitual” o “particularmente probable” u otros semejantes? ¿Hay algún criterio objetivo que permita al notario valorar tales calificativos? No.

1.11.2. ¿Recoge la ley las nociones de “sospecha” o “motivos razonables para sospechar” como desencadenante de la obligación de informar a iniciativa propia del notario? ¿Se concretan supuestos objetivos que permitan delimitar los supuestos de “sospecha” o “motivos razonables para sospechar”? No.

1.11.3. En su ordenamiento jurídico ¿es presupuesto de cualquier sanción la tipificación objetiva de las conductas sancionables? ¿Considera que los conceptos o juicios de valor tales como “sospecha”, “motivos razonables para sospechar”, “operaciones complejas”, “particularmente probable”, “extraordinariamente elevado”, “poco habitual”, “alto riesgo”, “riesgo escaso”, “especial atención”, permiten configurar tipos de conducta sancionables penal o administrativamente? Solamente es presupuesto de sanciones la tipificación objetiva de la conducta. No se sanciona por conductas subjetivamente calificables.

1.12. ¿Se ha encomendado a un órgano regulador de la profesión notarial la recepción de las informaciones con carácter previo para que aquél luego la haga llegar a la Administración Pública –judicial, policial o fiscal– competente en lugar de tenerlo que hacer directamente el notario? En caso afirmativo ¿cómo está previsto su funcionamiento? Solamente se permite el cumplimiento mediante la entidad colegiada. No mediante algún órgano de autoridad.

1.13. ¿Se impone al notario en algún caso el deber de abstenerse de autorizar con carácter absoluto? ¿Qué se le exige cuando sepa o sospeche que una operación está relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo? ¿Se exceptúa el caso de que con la abstención se dificulte el procesamiento de los implicados? ¿Hay algún caso en que se considere que resulta imposible la abstención? Solamente se obliga a que el notario se abstenga de actual, en el caso de que el cliente o usuario se niegue a proporcionar al notario la información o documentación que el notario requiera para cumplir con sus obligaciones.

1.14. ¿Se ha establecido alguna política o procedimiento adecuado de diligencia debida con respecto al cliente, a la información, a la conservación de documentos, al control interno, a la evaluación de riesgos y a la garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes? Solamente se impone al notario la obligación adicional de conservar la información y los documentos que para obtenerla le fueron entregados, por un plazo de cinco años.

1.15. ¿Puede la **administración tributaria** de su Estado utilizar los datos suministrados a los efectos de prevención del blanqueo

para orientar sus inspecciones fiscales? ¿Puede exigir al Notario datos a tal efecto? ¿Puede esta investigación comportar la responsabilidad como consecuencia de las infracciones fiscales de sus clientes? La Autoridad fiscal si podrá utilizar la información para los efectos previstos en la propia iniciativa de Ley.

1.16. **Secreto.-** En la lista de obligaciones a cargo de los profesionales en ciertos ordenamientos (como por ej. los de la UE), la más grave es la que obliga a infringir el secreto profesional. La propia personalidad del abogado, al igual que la del notario o la del gestor, se basa en que la confidencialidad para con el cliente que tiene encomendado es sagrada. Hoy en día, el profesional se encuentra entre la espada y la pared: la pared de su ética profesional, que le impone la confidencialidad, y la espada de la ley, que le obliga a informar, a revelar situaciones que se le han dado a conocer en el marco de su relación con el cliente, algo que siempre había estado protegido por la discreción, en las civilizaciones basadas en un estado de derecho (rule-of-law). Al negar que el secreto profesional encierra un valor superior y merecedor de protección frente a los valores que se persiguen con las políticas contra el blanqueo, se afianza un modelo norteamericano en el que el secreto profesional es un mecanismo fruto del encuentro de dos elementos: la confidencialidad (confidentiality) y la relación privilegiada (attorney/client-privilege). Ya ha quedado establecido que el secreto profesional no es un valor en sí mismo, sino que está en función de la protección de unos bienes dignos de protección especial, pero de rango diferente, a saber, de interés público y general o de carácter privado. Esto obliga a cotejar los diferentes bienes jurídicos que están en conflicto entre sí, sacrificando el secreto cuando éste protege a uno de rango inferior, en aras del interés público.

¿Cuál es el modelo adoptado en su ordenamiento? En el caso específico de esta iniciativa de Ley y de otras disposiciones principalmente de carácter fiscal, no se considera que el notario viola la obligación de guardar secreto profesional, cuando actúa en cumplimiento de este tipo de normas.

Resuma:

¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área?

¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas ?. El notario se ve obligado de conformidad con la iniciativa de Ley que ha sido fuente para la contestación del cuestionario anterior, a tres actividades específicas:

- Recabar información (ya mencionada) en casos específicos considerados como Actividades Vulnerables (ya enunciados).
- Dar aviso a la autoridad recaudatoria, por medios electrónicos, sobre la celebración de ciertas operaciones consideradas como Actividades Vulnerables, dentro de un plazo específico para ello.
- Conservar la información y documentación recabados en cumplimiento de las antes enunciadas por un plazo de cinco años.

El notario debe contar con los medios para dar avisos por vía electrónica y conservar la información y documentación que al efecto se recabe. El notario tiene estos medios electrónicos porque la realidad lo ha llevado a no poder prescindir de ellos y los obtiene y mantiene a su costa.

2. y control de cambios

1.1. *¿Debe el notario identificar al inversor? Si ¿Cómo? Con su pasaporte u otra identificación con fotografía (si es persona física) y/o los documentos con los que acredita su personalidad (si es persona moral el inversor) además de exhibir el documento migratorio con el que comprueba su legal estancia en el país ¿Debe conservar la documentación del inversor? Si en copia simple o certificada, dependiendo del estado. ¿Cómo?*

1.2. *¿Debe el notario controlar la residencia del inversor? En algunos casos sí, fiscales. ¿Se le debe justificar? En algunos casos sí, fiscales, para saber si es residente fiscal en el extranjero o no. ¿En todo caso o sólo cuando sea de países que no sean el propio de aquél? ¿Cómo se justifica?*

1.3. *¿Qué control debe hacer el notario respecto de los medios de pago? En tanto no entren en vigor las disposiciones para evitar el blanqueo de capitales, el pago por hacerse previo a la comparecencia con el notario, en muchos casos, simplemente las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad como se realizó el pago, y en pocas operaciones, suelen exigir las partes que se documente una forma específica de pago, si este se hace en el momento de la comparecencia ante el notario. ¿También los de los residentes en el país? En tanto no entren en vigor las disposiciones para evitar el blanqueo de capitales, el pago por hacerse previo a la comparecencia con el notario, en muchos casos, simplemente las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad como se realizó el pago, y en pocas operaciones, suelen exigir las partes que se documente una forma específica de pago, si este se hace en el momento de la comparecencia ante el notario.*

1.4. *¿Debe el notario controlar la previa obtención de notificaciones, autorizaciones o verificaciones necesarias para ciertos actos? Principalmente es el que se le compruebe la legal estancia de un extranjero para poder otorgar el instrumento.*

2.5. *¿Debe practicar un control reforzado cuando la inversión se realice en zonas de interés estratégico o de influencia o bajo control militar? Si ¿Cuál y cómo? En el caso de la adquisición de inmuebles en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas*

2.6. *¿Existe un registro de inversiones extranjeras? Si el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras ¿Qué relación guarda con él el notario; cuáles son sus obligaciones respecto del mismo? El Notario debe solicitar a las empresas que tengan inversión extranjera, que acrediten su inscripción ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, o la vigencia del Registro. En caso de no comprobarse, el Notario debe dar aviso al Registro de esta situación. ¿Hay diferencia de trato entre mexicanos residentes y los mexicanos no residentes? Fiscalmente si hay diferencia. Si un mexicano o extranjero tienen residencia fiscal en México, tienen un tratamiento determinado, y si un mexicano o extranjero son residentes fiscales fuera de México tienen un tratamiento fiscal distinto. ¿Al margen del documento migratorio, reciben los extranjeros residentes el mismo trato que los mexicanos residentes? Es decir ¿Cuál es el factor clave la nacionalidad o la residencia? Los extranjeros dentro de México pueden hacer únicamente las actividades que la Autoridad (Instituto Nacional de Migración) dependiendo de su condición y característica migratoria les permita. Y fiscalmente hablando, la residencia fiscal puede ser, como ya mencionamos, un factor de tratamiento distinto entre residentes en México y residentes en el extranjero.*

Resuma:

– *¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área? Solicitando la documentación mencionada con anterioridad, y dando aviso a la autoridad en caso de que no sea presentada*

– *¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?.*

3.- Mercados financieros y mercado de valores.-

3.1. *¿Colabora el notario con los órganos rectores de los mercados de valores? ¿Cómo? El Notario desempeña un papel muy importante en aquellas operaciones, que como las sucesiones que ante él se tramitan,*

llegan a tener dentro de los bienes que forman parte de los mismos, valores que cotizan en bolsa, por ejemplo y en éste caso, sería un acto de prudencia notarial el que se comunicara a los órganos rectores del mercado de valores, que determinado número de acciones de una empresa que cotiza dentro de la bolsa, están sujetos al trámite de la sucesión correspondiente y en su momento serían adjudicados a los herederos de los mismos, y en el mismo supuesto nos encontraríamos si el Notario interviene en una transmisión onerosa de valores cotizados en la bolsa, así como en la posible donación de tales valores y como se señaló con anterioridad, en todos los casos el Notario deberá comunicar estas operaciones para que los órganos rectores de la bolsa tengan conocimiento de dichas transmisiones.

2.2. *¿Vela el notario de alguna manera por la transparencia de las condiciones y ofertas recibidas?* En los términos de la LNDF, es obligación del Notario dar fe de las condiciones en las que se realicen las operaciones de adjudicación de bienes por sucesión, en las cuales los herederos reciban valores cotizados en el mencionado mercado de valores; en el mismo caso, cuando éstas se donan mediante un instrumento otorgado ante Notario será obligación del mismo comunicar la celebración de dichas operaciones a los órganos directivos del mercado de valores, con el objeto de que tomen conocimiento de las mismas.

2.3. *¿Controla el notario la realidad de las titularidades jurídicas y de las facultades de disposición?* Como se ha señalado en los términos de la Ley que regula las funciones notariales en el Distrito Federal, es nuestra obligación cerciorarnos de que quienes comparecen en representación de una sucesión, representa jurídicamente a la misma y que en su caso los bienes muebles que se transmiten, es decir títulos valor que pudieran formar parte del patrimonio del fallecido, son de acuerdo con el inventario exhibido, propiedad del autor de la sucesión y por lo tanto el albacea en ejercicio de las facultades que el Código Civil le otorga, puede con consentimiento de los demás herederos adjudicar los mencionados títulos valor.

En el supuesto de que se trate de una donación de tales valores, el donante deberá acreditar a satisfacción del Notario, la titularidad sobre las acciones de que se trate y en el mismo supuesto en cualquier transmisión onerosa de los mencionados títulos valor y desde luego, las facultades de disposición que el donante en su caso debe de tener, situación que en caso de estar representado su apoderado debe también acreditarlas.

2.4. *¿Controla el notario de forma especial los préstamos y otros instrumentos de financiación (sus sujetos intervinientes, los objetos a los que afectan, la situación registral, el control de cláusulas abusivas, ...)?* En los términos de la Ley del Notariado vigente, es obligación del Notario el cumplir con todos los requisitos que la misma establece en los casos de créditos hipotecarios, así como en cualquier otro acto similar como reconocimientos de adeudo con garantía hipotecaria y en general cualquier otro instrumento que garantice a favor de la parte acreedora, una garantía real. De acuerdo también con las normas vigentes, es obligación del Notario Público, el responder previa entrega que se le haga de los derechos correspondientes que se causen en el Registro Público de la Propiedad, la obligación que tiene el fedatario público de inscribir en el mismo los instrumentos que se otorguen.

Por otra parte, existe la obligación del fedatario público de controlar las cláusulas que el acreedor pudiera establecer y que se puedan considerar como cláusulas abusivas, pues es desde luego, una obligación del Notario otorgante el advertir a la parte deudora de la existencia de las mismas y explicárselas no sin tener en cuenta que la tendencia del mercado cada vez limita más esta defensa, pues como sabemos la regla de oro es que quien pone el dinero impone las reglas del tipo de contrato que se debe firmar.

2.5. *¿Realiza el notario alguna comunicación a la Administración fiscal por las transmisiones de valores mobiliarios y títulos valores o efectos públicos autorizadas por él? ¿Cuáles y cómo?* En los casos en que por sucesión tramitada notarialmente, se adjudica a los herederos de la misma valores mobiliarios o títulos valor, ya sea emitidos por empresas privadas o por entidades públicas, es obligación de los fedatarios públicos el dar al Servicio de Administración Tributaria, la declaración informativa múltiple en la cual conste que se adjudicaron bienes inmuebles en los cuales se cause en su caso el impuesto sobre la renta, o si se está exento de el, y como recordamos la transmisión por sucesión de bienes muebles o títulos valor negociados en el mercado de valores se encuentra exenta de dicho impuesto.

3.6. *¿Controla el notario de alguna forma la tasación de bienes que servirán de garantía de los activos financieros que se emitirán para su circulación en el mercado hipotecario?* En Como es práctica común en el mercado mexicano, porque las instituciones de crédito que operan en el mismo así lo exige, los bienes que servirán de garantía de los activos financieros que se emitirán para su circulación en el mercado hipotecario, serán siempre previa valuación que emitida por

institución autorizada así lo determine, lo que garantiza que la emisiones que se han mencionado, tengan siempre el respaldo correspondiente.

En el supuesto de que se den en garantía valores mobiliarios, como a títulos valor o efectos públicos emitidos conforme a la Ley del Mercado de Valores, los mismos se inscribirán en el Registro Único de Garantías Mobiliarias (RUG).

Resuma:

– *¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área ?* Como garante del Estado de Derecho en nuestro país, el Notario tiene la obligación profesional de cubrir todos los requisitos que la legislación local y federal establece en las operaciones que ponen en circulación en los mercados financieros y en el mercado de valores, los valores mobiliarios y títulos valor que emiten.

– *¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas ?* Existen programas de software que facilitan en el caso de los inmuebles que se dan como garantía real, en las emisiones de obligaciones y en los fideicomisos de garantía a nivel local se da aviso mediante el programa Declaración Informativa Múltiple con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, teniendo establecido a través del sistema de Administración Tributaria los avisos correspondientes al otorgamiento de cualquiera de estas operaciones.

Existe también a disposición del público el nuevo Registro Único de Garantías Mobiliarias.

4.- Aspectos tributarios: Generalmente, el notario ha de proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes, e información en general con trascendencia tributaria deducida de los actos y negocios contenidos en el documento notarial que autoriza. El notario colabora con la Administración de diversas formas:

1.1. Al calificar jurídicamente los actos y negocios que contienen las escrituras que autoriza, el notario da certeza al hecho imponible y colabora con el liquidador tributario.

¿Es así en su país? Sí ¿Dice algo al respecto su legislación nacional? Sí ¿Incurre en responsabilidad el notario por una errónea calificación, un equivocado asesoramiento? Sí ¿cuál? Es responsable solidario ¿cabe la posibilidad de hacer consultas fiscales a la Administración tributaria; por quién y cómo? Sí. Puede ser directamente el Notario y en algunos casos a través del Colegio Notarial (local o nacional).

1.2. Al informar a las partes, otorgantes e intervinientes en el documento, sobre las consecuencias y el régimen fiscal, está colaborando con la Administración.

¿Es así en su país? Sí ¿Dice algo al respecto su legislación nacional? Sí ¿Incurre en responsabilidad el notario por una errónea calificación, un equivocado asesoramiento? Sí ¿cuál? Es responsable solidario, además de la responsabilidad civil en que pueda incurrir ¿cabe la posibilidad de hacer consultas fiscales a la Administración tributaria; por quién y cómo? Sí. Puede ser directamente el Interesado o el Notario.

1.3. Al gestionar los documentos que autoriza se está asegurando del pago de los impuestos, y está con ello colaborando con la Administración.

¿Está el notario obligado a liquidar los impuestos devengados por los actos y negocios contenido en los documentos que autoriza? Sí ¿Y a hacer un avance de liquidación? Sí ¿Tiene el notario que hacer retenciones a las partes a cuenta de las posibles obligaciones tributarias de los otorgantes? Sí En caso de no estar obligado a liquidar impuestos: ¿lo hace en la práctica? ¿debería ser obligatorio que lo hiciera?

¿Es así en su país? ¿Dice algo al respecto su legislación nacional?

1.4. Al no admitir documentos no liquidados fiscalmente

¿Es así en su país? No ¿Dice algo al respecto su legislación nacional? No

1.5. Al informar sobre los actos celebrados ante él, el notario, por ejemplo, transmisiones onerosas, empresariales o no, y gratuitas, entre vivos y por causa de muerte, modificaciones jurídico reales, constitución, modificaciones estructurales de sociedades, disolución y liquidación de las mismas, transmisión de valores y títulos, etc.

¿Es así en su país? Sí ¿Dice algo al respecto su legislación nacional? Sí

4.6. ¿Cuáles son los impuestos concretos respecto de los cuales el notario colabora con la Administración tributaria? Impuesto Sobre la Renta (federal), Impuesto al Valor Agregado (federal), e Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (local). ¿Transmisiones onerosas empresariales o entre particulares, transmisiones gratuitas, inter vivos o mortis causa; plusvalías municipales, impuestos directos que recaen sobre las rentas de las personas físicas y las jurídicas, otros? En transmisiones onerosas entre particulares; en transmisiones gratuitas, inter vivos y mortis causa; en impuesto sobre la renta de personas físicas (tanto por la enajenación como por la adquisición de inmuebles). ¿Cómo lo hace? A través de medios electrónicos, tanto el pago como la declaración informativa. ¿Qué ley regula esta

colaboración? Ley del Impuesto Sobre la Renta y Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Resuma :

– ¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?. El pago se realiza por transferencia electrónica de fondos y la declaración informativa se presenta a través de un programa electrónico denominado “Declaranot”.

5. Bienes sujetos a una especial protección.- En primer término es importante destacar que las diversas materias que contiene el presente apartado, el notario público mexicano debe distinguir los distintos ámbitos de competencias en las que se desarrolla cada uno de los temas, de tal manera que podamos basar nuestra opinión en las distintas Leyes Federales y Estatales involucradas, y así nuestra opinión se encuentre debidamente sustentada.

5.1. Urbanismo: ¿Cuál es la intervención y el papel que juega el notario, como colaborador de la Administración, en la urbanización de terrenos y en su transformación de suelo rústico en urbano (reparcelaciones y reordenación del territorio, creación de entidades urbanísticas, derechos de adquisición preferente, unidades mínimas, protección del medio ambiente)? ¿Cómo desarrolla tal labor? ¿Dónde está regulado? Generalmente el tema de urbanismo, está íntimamente relacionado con Leyes Locales, en la cual el notario público debe de estar atento a las diversas Leyes de Desarrollo Urbano, en las que difiere dependiendo el Estado Federado en que se encuentre el Notario. A manera de ejemplo el Notario Público del Distrito Federal de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Desarrollo Urbano en todo acto jurídico celebrado ante su fe, debe hacer constar la inscripción correspondiente en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano.

5.2. Medio rural: ¿Y en relación con el medio rural y las fincas rústicas (indivisibilidad, unidades mínimas de cultivo, derechos de adquisición preferente de colindantes, de arrendatarios, concentración parcelaria, protección del medio ambiente, etc)? Durante el siglo pasado en México, existió el reparto de tierras rurales por parte del gobierno federal de una forma indiscriminada, al grado de que la autoridad a finales de los ochentas, señaló que no había más tierra por repartir. Este reparto de tierras se le llamó la “Reforma Agraria”, como una conquista de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.

La dotación de tierras la hizo el gobierno, en base al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

vigente en aquel entonces, a través de la figura del “ejido”, que justamente se refiere a una comunidad de personas a quienes se les otorgó el derecho y propiedad de una extensión de tierra donde estaría asentadas las tierras de uso común (donde se encontraría el asentamiento humano), parcelas y solares. Tierras a desarrollarse en actividades preponderantemente agrícolas. Estos “ejidos” tenían la característica de que no estaban en el comercio, por tanto, eran inembargables, imprescriptibles, e inalienables.

En el año de 1992, cuando el titular del Ejecutivo Federal estaba a cargo de Carlos Salinas de Gortari, viene la gran reforma en materia agraria, en la que se les otorga el beneficio a los ejidatarios de disponer de sus parcelas y solares, incluyéndolos dentro del derecho privado.

La posibilidad de estas ventas, se sujeta a distintos lineamientos en las que el notariado mexicano, debe estar alerta en dar cabal cumplimiento, y verificar que las condiciones jurídicas estén debidamente cumplimentadas a efecto de que la operación se otorgue con las formalidades de la ley Agraria, aplicable en materia federal.

Algunos de los requisitos fundamentales, para que estas ventas son tales como: correr el derecho de preferencia a los familiares del ejidatario, así como a los vecindados del ejido; elaborar además del avalúo autorizado por las autoridades catastrales, un avalúo bancario, mismo que dará certidumbre de que el vendedor lo esté haciendo en condiciones económicas aceptable, así mismo esta primera enajenación esta exenta del pago de impuesto sobre la renta, lo cual se puede dar bajo ciertas condiciones, siendo fundamental que órgano administrativo del ejido manifieste por escrito que el ejidatario vendedor sigue gozando de tal calidad, es decir la de ejidatario. Así las cosas, el notario mexicano siempre esta alerta ante este tipo de operaciones, ya que requiere técnica jurídica y un solido conocimiento en la materia.

5.3. Montes: ¿Y en relación con los montes protegidos y catalogados (inmatriculación, deslinde, derechos de adquisición preferente, autorizaciones necesarias, etc) Se responde en el punto 5.6

5.4. Aguas (marítimas, fluviales, lagos, subterráneas, etc): su explotación, uso, obras, protección del medio ambiente, etc. Se responde en el punto 5.6

5.5. Espacios naturales, protegidos, de especial interés (inmatriculación, deslinde, transmisión, etc.). Se responde en el punto 5.6

5.6. Costas y zona marítimo terrestre (servidumbres, autorizaciones, limitaciones a la construcción, derechos de adquisición

preferente, etc) Para abordar estos cuatro temas el equipo multidisciplinario mexicano, decidió hacerlo en un solo apartado, la razón es por que todas ellas son un derecho fundamental del pueblo de nuestro país que se recoge el artículo 27 de la Constitución Mexicana.

Este artículo Constitucional, por cierto uno de los más extensos de la Carta Magna, envuelve primordialmente el derecho de propiedad de los bienes tangibles e intangibles de la nación (tal como el espacio aéreo).

Inicia tal numeral de nuestra Constitución con una oración categórica, que no deja lugar a dudas, en el sentido de que todos los bienes pertenecen originalmente a la nación, y como modalidad estos son transferidos en propiedad privada a los particulares. De ahí se destacan una serie de bienes en los que están incluidos los bienes materia del presente trabajo y que pertenecen a la nación mexicana.

En cuanto los montes inmatriculados, debemos como notarios verificar en primera instancia, que originalmente pertenecen a la nación, posteriormente observar si por algún decreto o concesión federal hayan pasado a manos de un tercero, y observar la modalidad en que haya sido transmitida la propiedad o el derecho, para determinar quien es el propietario real, ya que unas de las características de los bienes nacionales son justamente que son inembargables, imprescritibles e inalienables.

Esta disposición Constitucional es tomada en la Ley General de Bienes Nacionales, misma que regula las formas y modalidades en que se dan las transmisiones de propiedad del Estado Mexicano, y estas deberán de darse ante Notarios autorizados del Patrimonio del Inmueble Federal, autorización que permite a los notarios locales formalizar ese tipo de operaciones donde el gobierno federal es parte de la transacción. Esta es una clara intervención y colaboración del notariado mexicano con la autoridad haciendo ágil el proceso, así como dando certeza jurídica a la administración.

El uso de las nuevas tecnologías siempre está presente en nuestra actividad notarial, al interactuar con las autoridades para la formalización de estas transmisiones, la utilización de herramientas como internet, tanto para la revisión y aprobación de proyectos, la obtención, recepción y envío de documentos, es totalmente indispensable en estos procesos.

En cuanto a las aguas, espacios naturales y costas, no existe la menor duda de que estos pertenecen a la nación mexicana, sin

embargo por concesión de la autoridad, pueden ser explotados por los particulares durante un tiempo determinado. El impacto sobre los bienes naturales debemos ser cuidadosos los notarios de que se cumplan con las diferentes autorizaciones de impacto sobre el ambiente y así hacerlo constar en nuestros instrumentos, ya que la Ley General de Equilibrio Ecológico, así lo establece, la autoridad en este sentido realiza una declaratoria misma que deberá ser protocolizada para que surta sus efectos legales correspondientes, ya que de otra suerte estaríamos incumpliendo la Ley. A manera de ejemplo, un desarrollo turístico colinadnte con la playa, se requiere tener en cuenta la legislación ambiental, de desarrollo urbano, entre otras tanto federales como estatales, para otorgar seguridad jurídica al prestatario del servicio notarial.

5.7. Edificaciones, viviendas

1.1.1. obras nuevas: licencia de edificación, certificados técnicos, libro del edificio, seguros da daños, cédulas de habitabilidad, licencia de primera ocupación, entrega de documentación, informe de medio ambiente, informe de calidad, otra información... En este rubro, el Notario Mexicano, tiene la obligación de verificar que el bien inmueble se encuentre libre del pago de impuestos (certificado de no adeudo fiscal), que se encuentre libre de gravamen en el Registro Público de la Propiedad(certificado correspondiente), de tener un avalúo actualizado, donde se especificarán construcciones manifestadas a la autoridad catastral por el propietario enajenante o en su caso la inexistencia de ellas, siendo estos los requisitos mínimos y normales que se llevan en cualquiera de los Estados Federados de la Nación, para el caso de transmisiones de propiedad; sin embargo, estos pueden variar de Estado a Estado, pero como se le hemos señalado estos son los requisitos normales en estas operaciones. Siguiendo como lo hemos citado con antelación, los lineamientos jurídicos Locales y Federales en materia de urbanismo, zonas protegidas, aguas, entre otros.

1.1.2. viviendas protegidas: precios y rentas máximas, derechos de adquisición preferente, ingresos máximos, ...acreditación de la residencia habitual, restricciones a la libre disponibilidad por el tipo de viviendas que son o por las subvenciones o ayudas recibidas La vivienda protegida en nuestro país se deriva de dos grandes instituciones que van de la mano con el sistema de Seguridad Social del Estado. Estás se dividen dependiendo de la calidad del trabajador, es decir si es empleado del sector privado (INFONAVIT) o del sector público (FOVISSSTE). El principal objetivo de estas instituciones

es la de Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: **a)** La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, **b)** La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y **c)** El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores.

Para este objetivo, se cuidan detalles, tales como que los materiales de las obras sean mexicanos, que la superficie construida sea suficiente para el desarrollo humano e integral de la familia.

El notario público, en este aspecto colabora con las instituciones públicas en materia de vivienda, en un primer término ajustando sus honorarios al arancel establecido por ellas en favor de los derechohabientes, siguiendo los lineamientos tanto técnicos como jurídicos para dar una certeza jurídica al proceso establecido por ambas entidades, bajo los formatos preestablecidos por ellas, mismos que son manejados en línea para darle un mayor eficacia a nuestra labor.

1.1.3. propiedad horizontal: deudas pendientes con los ayuntamientos, deudas con la comunidad de propietarios, derramas pendientes, etc... En este apartado nos remitiremos al punto 5.7.1.-de Obras Nuevas, ya que siempre tenemos la obligación de verificar que el bien inmueble se encuentre libre del pago de impuestos (certificado de no adeudo fiscal), que se encuentre libre de gravamen en el Registro Público de la Propiedad (certificado correspondiente), de tener un avalúo actualizado, donde se especificarán construcciones manifestadas a la autoridad catastral por el propietario enajenante o en su caso la inexistencia de ellas.

1.1.4. protección del medio ambiente El impacto sobre los bienes naturales debemos ser cuidadosos los notarios de que se cumplan con las diferentes autorizaciones de impacto sobre el ambiente y así hacerlo constar en nuestros instrumentos, ya que el artículo 75 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, así lo establece, la autoridad en este sentido realiza una declaratoria misma que deberá ser protocolizada para que surta sus efectos legales correspondientes.

1.1.5. controles de usos y actividades Esta materia es competencia de la autoridad Local en cada Estado de la República Mexicana, donde el notario deberá atender a los Planes de Desarrollo Urbano inclusive Municipales, a efecto de considerar la posibilidad de transmisión de propiedades.

1.1.6. edificios de interés histórico o cultural Estos se encuentran regulados por Ley General de Bienes Nacionales, bienes que no se encuentran en el comercio, por lo tanto, entran en la categoría de que son inembargables, imprescriptibles, e inalienables. Así pues, el notario no podrá formalizar ante su fe la transmisión de monumento, edificio o bien histórico, cultural de la nación, excepción hecha de que sea Notario del Patrimonio Inmueble Federal.

5.8. Propiedad intelectual El notario público es un asesor legal de las partes, en el tema de Propiedad Intelectual e Industrial, el notario únicamente ratificará firma de las solicitudes que se presenten por conducto de mandatario al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, dando la certeza de que la firma estampada por el mandante es justamente la de él.

5.9. Propiedad industrial ver 5.8.

5.10. Aeronaves, buques En lo que se refiere a aeronaves la Ley de Aviación Civil, establece que la intervención del notario en los casos de abandono de aeronaves por lo que, previamente a la declaratoria de abandono, se harán las publicaciones de ley, hará la declaratoria de abandono de la aeronave, pasando ésta a propiedad de la Nación y procederá a su enajenación en subasta pública, con participación de las autoridades correspondientes y ante notario público. Respecto las embarcaciones marítimas la Ley de Navegación establece el documento en el que conste la propiedad de una embarcación, los cambios de propiedad o cualquier gravamen real sobre ésta, deberá constar en instrumento otorgado ante notario o corredor público, contener los elementos de individualización de la embarcación y estar inscrito en el Registro Público Marítimo Nacional.

5.11. Otros bienes muebles Las operaciones de bienes muebles en México, generalmente se realizan en contrato privado algunas veces ratificados en contenido y firmas ante notario público, con la finalidad de que la autoridad tenga la certeza de que las firmas realmente pertenecen a los otorgantes.

5.12. Semovientes ver 5.11.

Resuma:

- ¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área ?
- ¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?

6. Catastro:

6.1. ¿Existe en su país un registro que refleja la riqueza territorial del mismo, generalmente utilizado con fines fiscales y que se

suele denominar CATASTRO INMOBILIARIO? Sí existe y en lo general sí refleja la riqueza territorial del mismo, aunque con algunas singularidades: No existe un Registro Nacional sino que cada una de las 32 Entidades Federativas (31 Estados y un Distrito Federal) tiene una Ley Catastral o Normatividad que se aplica sólo en el territorio del Estado de que se trate o en el Distrito Federal. En pocos casos, existe además un Reglamento Municipal en materia catastral, como por ejemplo es el caso de los Municipios de: TIJUANA, TECATE, ENSENADA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO, ubicados en el Estado de Baja California; Municipios: CASTAÑOS; PARRAS; SAN JUAN DE SABINAS; PROGRESO ubicados en el Estado de Coahuila.

Marco Constitucional: El artículo 115, fracción IV de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las **contribuciones** y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las **contribuciones**, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados **sobre la propiedad inmobiliaria**, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el **cambio de valor de los inmuebles**.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, **propondrán** a las legislaturas estatales **las cuotas y tarifas aplicables a impuestos**, derechos, contribuciones de mejoras y **las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria**”.

Marco Legal: La materia Catastral corresponde al ámbito Estatal y Municipal, porque, por un lado, el valor catastral sirve de base –aunque no es el único elemento– para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) o de traslación de dominio que va a las arcas de la entidad federativa (Estado o DF), y por otro lado sirve de base para determinar el impuesto predial que constitucionalmente corresponde al Municipio: sin embargo en la gran mayoría de los casos de nuestras 32 entidades federativas prevalece la función estatal sobre la municipal, tanto en el campo regulatorio como en cuanto a la estructura administrativa del área de catastro. Por excepción encontramos casos donde Catastro se encuentra bajo

el ámbito Municipal. Aunque la Leyes catastrales Estatales tiene una adecuada estructura técnica y jurídica en la materia, al centralizar actividades —como por ejemplo la valuación de los predios urbanos Municipio por Municipio— puede llegar a ser una desventaja para mantener actualizados los valores catastrales no obstante que existan los instrumentos jurídicos para ello en la Ley, además de que tienden a prevalecer criterios políticos de cálculo Estatal y no estrictamente Municipales en la actualización de los valores, lo cual también puede ser una desventaja ante el gran mosaico de convivencia multipartidista de los dos mil cuatrocientos treinta y cinco Municipios, comprendidos en 31 Estados y el Distrito Federal con sus 16 Delegaciones Políticas, que tienen diversos orígenes Partidistas (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, etc., etc.). Lo deseable es que prolifere un mayor protagonismo del Municipio en materia catastral.

Vemos con frecuencia, en la práctica —salvo el caso del DF, Estado de México y grandes ciudades— que no es suficiente que exista un amplio marco jurídico regulatorio del catastro en cada entidad federativa, e inclusive en algunos Municipios; porque aún y cuando existen jurídicamente múltiples formas para garantizar en general un catastro moderno, eficiente, eficaz, actualizado y útil para fines recaudatorios, lo cierto es que los valores catastrales en muchas Entidades Federativas se mantienen rezagados con valores simbólicos o risibles muy alejados de los valores reales, comerciales o de mercado y simplemente no se aumentan dichos valores por cálculos políticos, especialmente del Gobernador en turno. Generalmente catastro es dominado por la autoridad Estatal y no por cada Municipio. Los impuestos no dan popularidad.

6.2. ¿Qué colaboración o relación mantiene con él el notario? El Notario colabora con catastro suministrándole la información cuando hay cambio de titular o titulares catastrales, cambio de modalidad en el régimen de propiedad como es el régimen de condominio, lotificación, fusión, subdivisión o fraccionamiento y también el notario tiene una estrecha relación con catastro porque a su vez recaba información de catastro (titular/ubicación/superficie/valor catastral del inmueble) para sustentar el acto jurídico que hace constar en su instrumento notarial. ¿Necesita obtener de él alguna información para autorizar el documento? Catastro sí necesita información que debe suministrar el Notario para autorizar un movimiento catastral, como lo es el número de escritura, avalúo —cuando el acto o la Ley local lo exija— ; datos del nuevo titular catastral; en su caso planos o autorizaciones de fusión, subdivisión, lotificación

o fraccionamiento. Todo lo cual permitirá a catastro actualizar o modificar sus registros. ¿Debe enviarle alguna información, por ejemplo, en caso de cambio de titularidades o de modificaciones hipotecarias –segregación, división, agrupación o agregación de fincas, declaración de obras nuevas o división de inmuebles en régimen de propiedad horizontal-? El Notario si envía a catastro toda la información que hace constar y que tiene que ver específicamente con el asiento catastral, esto es con su titularidad, superficie, medidas y colindancias del inmueble, pago del ISAI, avalúo actualizado de terreno y construcción, incluyendo construcciones, nuevas, ampliaciones o mejoras; fusión, subdivisión, lotificación o fraccionamiento. Normalmente catastro no tiene vinculación con la hipoteca, ello corresponde al Registro Público de la Propiedad en sus libros o secciones de gravámenes.

Cabe destacar que en tratándose de obras nuevas, el notario sólo informa de las mismas a catastro con motivo de algún acto formalizado notarialmente. En el caso del DF y varias ciudades grandes del País, al expedir la autoridad Municipal —en el DF la Delegacional— la licencia de construcción de obra nueva, ampliación o modificación se impone al gobernado la obligación de dar un aviso de terminación de obra, manifestando el valor de la misma y con ello la autoridad catastral actualiza el valor del inmueble.

6.3. ¿Cuál es la relación entre Catastro —contemplado más como un registro fiscal— y Registro de la Propiedad —contemplado como registro de titularidades jurídico-reales— en su país? La relación de Catastro con el Registro de la Propiedad es de complementación y de interacción, pues para inscribir en el Registro de la Propiedad un acto jurídico pasado ante notario debe acreditarse en el testimonio del instrumento notarial haber cumplido con los requisitos catastrales aplicables al caso, inclusive en algunas ocasiones cuando no existe antecedente registral en el Registro de Propiedad, con certificaciones o historias catastrales expedidas por catastro se sustenta una inscripción en el Registro de Propiedad. Por ello podemos afirmar que la titularidad catastral va en mancuerna con la titularidad registral.

Resuma:

– *¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área ?* La relación notario-catastro no es una relación de supra-subordinación, sino de colaboración entre dos entes que ejercen una función pública, pues recordemos que la au-

toridad catastral tiene fé pública en materia catastral. En forma dialéctica el notario se basa para formalizar el acto o hecho jurídico en información, certificaciones, constancias o actos catastrales y a su vez catastro se actualiza, modifica y ajusta de acuerdo a la información que le suministra el notario con motivo de su actuación. Aunque también hay que mencionar que catastro también se actualiza o modifica por otros actores o eventos, como son actos de jueces, de autoridades administrativas en materia de previsiones, usos y reservas en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, etc.

– *¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?*
En mayor o menor medida las áreas de catastros de las entidades federativas –que normalmente dependen de una Secretaría de Administración y Finanzas- cuentan con un razonable soporte tecnológico y estructura administrativa hacia el interior para el desempeño de sus funciones. Sin embargo no todas las entidades federativas ofrecen un enlace directo ó en línea para consulta, solicitud de certificados catastrales ó envío de declaración del pago del ISAI. El Distrito Federal cuenta un sistema de notarios y valuadores SINOVA, el Estado de México y algunos otros estados tienen línea de captura para el pago del ISAI por medios telemáticos. Sin embargo algunos de éstos sistemas sólo son accesibles al notariado de la entidad en cuestión y no están abiertos al resto de los notarios de las demás entidades federativas. Falta establecer un sistema nacional que permita acceder a los servicios o actos catastrales de cualquier entidad federativa por cualquier notario del país, como sí ocurre en el pago de impuestos federales (IVA, ISR, etc.) con el SAT (servicio de administración tributaria) mediante el declaranot.

7.- En materia de consumidores: ¿Juega el notario algún papel en su país en relación:

1.1. A los contratos de masas o de adhesión y a algunas de sus cláusulas, consideradas per se abusivas ¿cuáles son? Los contratos por adhesión deben registrarse ante la Procuraduría Federal del Consumidor ¿existe algún fichero o registro donde se puedan consultar? En el registro que lleva la Procuraduría Federal del Consumidor

1.2. con cierta información a facilitar por tal razón -¿a quién y cómo?

1.3. con un derecho de arrepentimiento o de resolución unilateral a posterior del contrato celebrado? En el caso de los bienes

adquiridos directamente a domicilio por sistemas de telemercadeo, si existe el derecho de arrepentimiento por parte del consumidor.

1.4. a las garantías a prestar y obtener?

1.5. a la existencia para las viviendas de cédulas de habitabilidad, licencias de primera ocupación, certificado de calidades, libro del edificio, certificados de suministro de servicios (luz, agua, gas), estado de gastos en la comunidad de propietarios en que se halla. En algunos lugares las autoridades solicitan al Notario que se cerciore de que los pagos de los servicios como agua están al corriente, para que pueda formalizarse una escritura traslativa de dominio respecto de un inmueble.

1.6. transparencia en la información para la obtención de financiación que permita la adquisición de bienes (¿contrasta el notario la financiación prometida con la que finalmente se ofrece?) Los términos de los contratos de crédito se hacen constar en las escrituras mismas, para evitar que los usuarios de los servicios financieros pudiesen alegar que hay cobros o condiciones que no constaban en la escritura; gestión on line de los préstamos, preparación de la concesión del préstamo mediante la utilización de las nuevas tecnologías.

Resuma:

- ¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área ?
- ¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?

8.- Registros públicos: Conteste

1.1. Si existen

En México existen diversos registros públicos, el Registro de la Propiedad es con el que más contacto tenemos los notarios, seguido del Registro Mercantil.

Otros registros públicos en los que se inscriben actos formalizados ante notario son el de garantías mobiliarias, el agrario, el de inversiones extranjeras, el aeronáutico, el marítimo, y el de la propiedad federal.

1.2. ¿Dónde se regulan?

El registro de la propiedad es regulado por leyes expedidas en cada estado por su respectivo poder legislativo, complementadas por disposiciones reglamentarias expedidas por el poder ejecutivo estatal. El registro mercantil se regula en el código de comercio emitido por el Congreso de la Unión con aplicación en toda la República y

en un Reglamento expedido por el ejecutivo federal; en su operación son aplicables también los lineamientos expedidos por la Secretaría de Economía federal.

1.3. ¿Quién es la persona o autoridad competente que lo gestiona?

La gestión y operación del Registro de la Propiedad está a cargo de la estructura orgánica de las administraciones públicas estatales dependientes del poder ejecutivo local, lo que significa que hay 32 registros de la propiedad independientes (uno en cada estado y otro en el distrito federal). El registro mercantil es operado por las mismas dependencias estatales que tienen a su cargo el registro de la propiedad en un esquema de colaboración con el ejecutivo federal sustentado en convenios para este propósito suscritos por el gobierno federal y los ejecutivos estatales.

1.4. Si el notario tiene acceso a él y obtiene información, cuál y cómo (procedimiento, forma, plazo, etc), y si está obligado a ello.

El notario tiene acceso a todos estos registros para solicitar información y para solicitar la inscripción de los actos jurídicos otorgados en sede notarial; en todos los registros el acceso es mediante presencia física en las oficinas respectivas a excepción del registro de garantías mobiliarias al que solo puede accederse vía electrónica; el acceso al registro mercantil también puede hacerse por medios remotos desde la oficina notarial.

1.5. Si el notario le envía información, cuál y cómo (procedimiento, forma y plazo) y si está obligado a ello

1.6. Responda a las anteriores preguntas respecto de los siguientes registros, si existen, y otros no mencionados que haya en su país o que usted considere que sería útil y necesario que existiesen (y si en tal cosa podrían estar a cargo del notario o de sus órganos corporativos):

1.6.1. Registro de la Propiedad. Conteste, entre otras, la siguiente pregunta en particular: ¿se remite al mismo la copia íntegra del documento o sólo una ficha con los datos de carácter real que hayan de tener eficacia frente a terceros? Se remite copia íntegra del documento en físico.

1.6.2. Registro Mercantil: Conteste, entre otras, la siguiente pregunta en particular: ¿se remite al mismo la copia íntegra del documento o sólo una ficha con los datos de carácter real que hayan de tener eficacia frente a terceros? Se remite copia íntegra del documento y, además, una ficha (forma pre codificada) con los datos que tienen eficacia frente a terceros, en físico o en electrónico (firmada con la firma electrónica del notario).

1.6.3. Registro de bienes muebles Sólo se llena una ficha con los datos que tienen eficacia frente a terceros, esto se hace de forma electrónica, y siempre que el notario o usuario que alimenta esta información, tenga firma electrónica expedida por la Secretaría de Economía.

1.6.4. Registro de Cooperativas Es el Registro Público de Comercio y se remite copia íntegra del documento, en físico.

1.6.5. Registro de Fundaciones En algunas de las entidades donde se regulan, se remite copia íntegra física del documento a la sección de Personas Jurídicas del Registro Público de la Propiedad.

1.6.6. Registro de Asociaciones Se remite copia íntegra física del documento a la sección de Personas Jurídicas del Registro Público de la Propiedad.

1.6.7. Otros registros de entidades con o sin personalidad jurídica

1.6.8. Registro de actos de última voluntad (partes testamentarios, obtención de certificados de última voluntad) Es a nivel federal, pero lo alimentan los encargados de los archivos de instrumentos públicos de cada Estado de forma electrónica.

1.6.9. Registro de autotutelas (previendo quien ha de ser tutor y representante legal ante una posible futura propia incapacitación judicial o de terceros muy allegados por los cuales se actúe –decisión adoptado en nombre de los hijos menores-)

1.6.10. Registro de voluntades anticipadas: en el que se recogen las declaraciones vertidas por una persona en previsión de su posible futura enfermedad diciendo que no quiere que se le prolongue artificialmente la vida o se le mantenga en estado vegetativo Comienzan a existir pues la voluntad anticipada comienza a contemplarse por algunas legislaturas estatales.

1.6.11. Registro de declaraciones de herederos abintestato (que tienen lugar por ausencia de un testamento válido y eficaz)

1.6.12. Registro de poderes no mercantiles –en general de aquellos que no tengan acceso al registro mercantil o de comercio- y de revocación de los mismos Hay un proyecto de hacer uno federal, a la fecha no existe.

1.6.13. Registro de expedientes inmatriculadores del dominio sobre inmuebles (actas de notoriedad)

1.6.14. Registro de seguros contratados a lo largo de la vida, eficaces al abrirse la sucesión, para que puedan ser conocidos por sus herederos o beneficiarios al fallecimiento de su tomador. Esta

información puede solicitarse físicamente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

1.6.15. Registro de expedientes de reagrupación familiar de extranjeros

1.6.16. Registro de expedientes de actas de invitación a terceros, incluso para instalarse permanentemente o por una larga temporada en el país.

1.6.17. Registro de bases de concursos, sorteos, juegos de azar
Depende de Secretaría de Gobernación.

1.6.18. Registro Civil o del estado civil (para conocer y comunicar cambios en el estado civil o en el régimen económico matrimonial) Existen en cada municipio de los 32 estados de la República Mexicana, su información, en la mayoría de ellos, ya está digitalizada, y permite la expedición en minutos de duplicados certificados, o de extractos de los mismos.

1.6.19. Registro de concursados, quebrados, incursos en suspensión de pagos y procesos de insolvencia, en general Esta información la tiene el Instituto Federal de Concursos Mercantiles.

1.6.20. Registros policiales: para conocer antecedentes penales, su condición de residente o no en el país, su número de identificación de residente, etc. La policial existe en cada estado, y la migratoria depende del Instituto Nacional de Migración, que depende de la Secretaría de Gobernación.

— 1.6.21. Registros municipales de empadronamiento de habitantes

1.6.22. Registros de inversiones extranjeras Si depende de Secretaría de Economía, se llama Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, hay posibilidad de entregar la información que solicitan de forma física o electrónica.

1.6.23. Registros de tráfico (circulación de vehículos de motor)
Son padrones estatales que dependen de las Secretarías de Vialidad y Transporte.

1.6.24. Registros municipales de nichos y sepulturas

Resuma :

– ¿Cómo colabora el notario, individual o corporativamente, con la Administración en este área ?

– ¿Cómo usa para ello las nuevas tecnologías y cuáles son éstas?

9.- La asunción de funciones que corresponden a otros órganos del Estado, como, por ejemplo, los judiciales, descongestionándolos y dotando a los procedimientos de una mayor agilidad:

1.1. judiciales:

1.1.1. situaciones no conflictuales o de jurisdicción voluntaria:

1.1.1.1. ¿cuáles se tienen ya asumidas? En el estado de Jalisco el notario puede También le faculta intervenir como mediador, conciliador o árbitro, y en concurrencia con los órganos jurisdiccionales, en el trámite de negocios de jurisdicción voluntaria y de los procedimientos sucesorios en tanto no se suscite controversia entre los interesados, en los casos en que expresamente la Ley lo autorice.

1.1.1.2. ¿qué ley las regula? LNJal

1.1.1.3. ¿podrían asumirse otras? ¿cuáles?

1.1.2. situaciones conflictuales:

1.1.2.1. ¿cuáles se tienen ya asumidas?

1.1.2.2. ¿qué ley las regula?

1.1.2.3. ¿forman parte de la esencia de la función notarial y se ejercen por derecho propio, o más bien por delegación de otras autoridades, sean éstas judiciales o administrativas? En caso afirmativo, ¿de cuáles? ¿cuál es el carácter con que actúan en caso de delegación: como autoridad pública, como delegado privado de la autoridad pública, ...?

1.1.3. ¿podrían asumirse otras? ¿cuáles?

1.1.4. Háblenme de las dos siguientes:

1.1.4.1. Mediación

1.1.4.1.1. ¿Tiene competencias el notario? Si En caso afirmativo ¿dónde se regulan y en qué consisten? Art 3 LNJal y Art 33 VII LNDF no se detalla En caso negativo ¿podría tenerlas?

1.1.4.1.2. Arbitraje ¿Tiene competencias el notario? Si En caso afirmativo ¿dónde se regulan y en qué consisten? Art 3 LNJal y Art 33 VI LNDF no se detalla En caso negativo ¿podría tenerlas?

9.2. administrativas (por ejemplo: ¿podría llegar a asumirse por los notarios la gestión de registros que hoy están encomendados a otros órganos de la Administración? ¿Cuáles?

Responda también brevemente:

– *si se mantiene relación y de qué tipo con las autoridades judiciales o administrativas a las que sustituye* En el caso de Jalisco, para fungir como auxiliar del órgano jurisdiccional, lo normal es que se inicie el procedimiento solicitando a la autoridad jurisdiccional la habilitación o autorización al notario para que pueda proceder a auxiliar en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, y en el caso del sucesorio, solo hay contacto con la autoridad jurisdiccional, cuando la sucesión es continuada en sede notarial. También puede iniciarse en algunos casos en sede notarial.

– *si se utilizan y cómo las nuevas tecnologías en el desarrollo de estas funciones.* Depende del Notario

10.- En procesos electorales ¿qué papel desarrolla el notario en su país o puede llegar a desarrollar? ¿En qué forma? ¿Se sirve de las nuevas tecnologías para ello? La función notarial se hace presente en el desarrollo del Derecho Electoral en México. Por una parte la colaboración con los poderes públicos y por otra la utilización de las nuevas herramientas tecnológicas, para hacer de nuestra labor un eslabón fundamental en los procesos electorales.

El derecho electoral, es una materia relativamente nueva en nuestro país, basta recordar que todavía hace un par de décadas la democracia era regida por un solo partido quien detentaba el poder, poco a poco, nuestra incipiente democracia fue creando instituciones reconocidas, sólidas, que han dado certidumbre y credibilidad a los procesos electorales; ahí tenemos el Instituto Federal Electoral, órgano rector de las elecciones federales, autónomo, ciudadanizado. Otro ejemplo lo es el Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que vino a resolver las impugnaciones en esta materia; consideramos que tenemos trabajo por delante, las bases son sólidas, y la función notarial no ha sido ajena, ni ha permanecido estancada a estos cambios, los cuales se comparten con gusto.

En materia federal, son dos legislaciones fundamentales en las cuales descansa el Derecho Electoral en la República Mexicana:

- a) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- b) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el primero de los ordenamientos, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante el cual se organizan las elecciones en nuestro país, prevé la participación del notario desde diversos momentos en los que se divide una elección, desde actos previos a las precampañas, las propias precampañas, las campañas electorales y la jornada electoral. En todas estas etapas el notario juega un papel fundamental, ya que debemos prestar nuestros servicios a los propios candidatos, partidos, funcionarios de casilla y ciudadanía en general que los solicite, y que pueden ser desde recepcionar una comparecencia de forma testimonial, hasta diversos tipos de fe de hechos, en los que se hagan constar una variedad infinita de actos relativos al proceso electoral, por citar un ejemplo; En vísperas de la elección presidencial del 2012 en México, existen calendarios electorales, en los cuales los pretensos ciudadanos que desean ser candidatos de algún partido político, deben cuidar las formas, especialmente en cuanto se refieren

a propaganda electoral ya que esta se encuentra limitada a las campañas electorales, es ahí cuando la fe pública entra en acción al dar testimonio de posibles actos en contra de la ley, videograbaciones, en espectaculares, inclusive en las redes sociales, el notariado realiza sus funciones desde antes del arranque del calendario electoral, nuestra legislación es clara en cuanto el accionar de nuestra especialidad.

Igualmente en la etapa de precampañas y campañas, estamos atentos a cualquier llamado, primordialmente por aquellos partidos políticos o candidatos que consideran que su contraparte ha cometido alguna violación a las leyes electorales, acercando pruebas o pidiendo salir de la notaría a recabar la prueba en el lugar de los hechos, ya que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevé un valor importante a las pruebas que son robustecidas mediante la fe pública, es por ello que nosotros debemos de ser cuidadosos respecto cada elemento definitorio que se nos acerque tales como filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros, para dar la certeza jurídica que merecen a dichos documentos.

Adicionalmente a tales actividades, durante el proceso electoral, aún más en la etapa de las campañas, se han sumado en los últimos años, los compromisos y promesas que realizan los candidatos al electorado, donde se nos ha solicitado que tales ofrecimientos queden plasmados bajo nuestra fe, dando una certeza al electorado que la palabra empeñada por el pretense a ocupar un puesto de elección la cumplirá; esto nos lleva a la evidencia de que la ciudadanía cree y está convencida en la labor, constancia y certeza que otorga la fe pública del notariado mexicano.

El día de la jornada electoral nuestra función no es menos importante, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los notarios debemos mantener abiertas nuestras oficinas el día de la elección y debemos de atender las solicitudes que hagan los funcionarios de casillas, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos, para dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección; Los Colegios de Notarios en el país, deben de publicar 5 días antes de la elección, los nombres y domicilios de oficina de cada uno de sus miembros, siendo totalmente claro este imperativo legal, nos remite de nueva cuenta a la labor en materia de hacer constar bajo nuestra fe los hechos que tengamos a nuestro alcance por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, así como la certificación de documentales

que para nuestra jurisprudencia aquellos son considerados como tales.

Consideramos valioso citar la siguiente Jurisprudencia Definida de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde encuadra los distintos tipos de documentos que generan un valor probatorio, incluyendo aquellos que van de la mano con el desarrollo tecnológico y científico que se produce y perfecciona, constantemente, así como los nuevos instrumentos con particularidades específicas, en donde el notario a efecto de consolidar dichas pruebas requiere estar al día de estos cambios, entenderlos, desarrollarlos y así manifestarlos en el acta final, a efecto de que al juzgador en materia electoral reciba de manera clara y detallada, la certeza jurídica que se le imprime a dicho acto jurídico.

Pruebas técnicas. Pertenecen al género documentos, aun cuando en algunas leyes tienen regulación específica. La teoría general del proceso contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general *documentos* todos los de este género, para regularlos bajo una denominación diferente, como llega a ser la de *pruebas técnicas*, con el fin de determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción en comento, tales elementos

materiales siguen regidos por los principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a los documentos, por una parte, y a otros elementos que gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y valoración de los medios probatorios, en la medida de sus propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se haga la exclusión de modo expreso e indudable.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. Partido Acción Nacional. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/2004. Coalición Alianza por Zacatecas. 12 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256.

A manera de ejemplo, se nos solicita dar fe de alguna cuenta de *Twitter* o *Facebook*, donde algún candidato o partido, presumiblemente ha violado las Leyes Electorales, en el acta respectiva tendremos la cautela de señalar quien la solicita, y en qué carácter, en que computadora se está abriendo el explorador de internet, el lugar donde estamos tomado la señal de *wi-fi*, que es lo que se observa, si es indispensable imprimir un juego de lo que se está observado, señalar con precisión en que impresora se está reproduciendo, en fin cubrir todas aquellas formalidades necesarias, para dar credibilidad al órgano electoral que en sus manos llegará nuestra dación de fe. Considero sin lugar a dudas esté podría ser un vivo ejemplo del uso de las nuevas tecnologías de las cuales nos valemos los notarios públicos, en nuestro proceso de colaboración con los poderes públicos en materia electoral.

La actuación del notario se limita un tema de pre constitución de pruebas y de constatación de hechos levantando actas de certificación de hechos.

11.- Creación de empresas; ¿cuáles son las funciones que ejerce actualmente el notario en su país para agilizar el proceso de constitución, disolución y liquidación y de modificación de la estructura y de los estatutos de sociedades colaborando y facilitando en ello la labor de la Administración –por ejemplo, obtención de la denominación social, obtención del número de identificación fiscal y del alta en el censo de actividades, inscripción en el registro mercantil o de comercio, liquidación de impuestos, etc.-? ¿Cómo las ejerce? ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías? Para agilizar el proceso de constitución de empresas los notarios mexicanos utilizamos una herramienta tecnológica consistente en un portal web operado por la Secretaría de Economía del gobierno federal denominado www.tuempresa.gob.mx a través del cual gestionamos y obtenemos el permiso para uso de la denominación social, inscribimos a la sociedad en el Registro Público de Comercio y en el Registro Federal de Contribuyentes, efectuando el pago de los derechos respectivos en línea.

En el caso de modificación de los estatutos sociales, transformación, disolución y liquidación de sociedades mercantiles efectuamos el trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio a través de otra herramienta tecnológica operada por la misma Secretaría denominada Fedanet-Siger, efectuando el pago de los derechos respectivos en línea.

En estos casos el papel de las nuevas tecnologías es crucial y la oficina notarial hace las veces de ventanilla única para tres trámites que corresponden a dependencias del gobierno federal, con lo que la colaboración notarial con la Administración se vuelve muy efectiva y se reducen significativamente los tiempos de respuesta.

V.- Límites a la colaboración:

Toda colaboración con la Administración debe estar sujeta a unos límites:

1.- Que **no desnaturalice la función notarial** (que no haga que los ciudadanos pierdan la confianza en el notario): el notario es un jurista, no es misión suya inspeccionar ni recaudar impuestos; tampoco se le deben imponer obligaciones contradictorias con las funciones propias del notario, que dificulten o entorpezcan aquéllas; se debe respetar el secreto notarial.

El notario y sus colaboradores están en contacto directo con las personas, sus familias e instituciones. Se le confía información vital y confidencial, que no puede, por regla general divulgar. El deber de secreto genera la confianza en el notario. No obstante, pueden existir casos en que cierta información deba poder ser divulgada.

El objetivo del secreto profesional, y del notarial en particular, es garantizar una eficaz protección al cliente por la información que éste ha facilitado al notario para que pueda desarrollar debidamente la misión que se le confía.

1.1. ¿Reconoce su legislación nacional dicha obligación de guardar secreto profesional? Si

1.2. En caso afirmativo, ¿qué textos lo regulan ? Cada ley del notariado a nivel estatal.

1.3. ¿Constituye el secreto profesional un principio general y absoluto o le afectan excepciones y limitaciones ? Tiene excepciones y limitaciones

1.4 ¿Cuál es el contenido de dicho secreto : a qué información afecta? En el caso de Jalisco el artículo 43 de la LN Jal dice que “El notario autorizante, el o sus asociados, asistentes, practicantes para el ejercicio notarial, empleados, dependientes y demás personas que puedan tener acceso a los libros del protocolo, así como el Director del Archivo de Instrumentos Públicos y los demás servidores públicos de esa dependencia, están estrictamente obligados a guardar el secreto profesional sobre actos que autorice el primero y aun sobre la existencia de ellos, salvo cuando lo requiera la Secretaría General de Gobierno o por orden judicial o ministerial, fundada y motivada, sean requeridos. Las personas señaladas en el párrafo anterior quedan sujetas en su caso a las disposiciones del Código Penal del Estado por el delito de revelación del secreto profesional” **¿Afecta dicha obligación de secreto a todos los hechos y negocios confiados al notario?** Respondido en anteriormente **¿Sólo a los que guardan relación directa con el documento notarial a preparar?** Respondido en anteriormente **¿Sólo de los que tiene conocimiento durante la fase de autorización o también a los previos y preparatorios o a los posteriores o de gestión?** Respondido en anteriormente.

2. El secreto notarial protege al cliente de indiscreciones. El cliente es el beneficiario del secreto mientras que el notario es quien está obligado a guardarlo.

2.1 ¿En su legislación nacional afecta esta obligación de guardar secreto sólo al notario? No también a otras personas, como ya respondimos con anterioridad ¿También a sus colaboradores y empleados? Si ¿Existe una enumeración de las personas a que afecta? Si ¿Se hallan entre éstas personas las que sólo ocasionalmente guardan relación con el notario por motivos profesionales, como intérpretes, encuadernadores, personal de limpieza y mantenimiento de las oficinas, etc.? Si

2.2 ¿Es necesario que los clientes soliciten del notario que guarde silencio o se trata de una obligación general y automática que pesa sobre él? Es una obligación que automáticamente asumimos por ley.

2.3 Esta obligación de guardar secreto ¿está limitada en el tiempo? No ¿recae también sobre los notarios jubilados o en excedencia? Si ¿Y sobre los trasladados a otra población respecto de los hechos conocidos con anterioridad? Si ¿Se mantiene respecto de los documentos que pasan a ser guardados en archivos accesibles al público? Si

2.4 ¿Puede renunciar el cliente al derecho que tiene a que el notario guarde secreto? No En el Notariado Mexicano con las legislaciones en particular de las 32 entidades federativas y el Distrito Federal, coinciden en que el Notario Público está obligado a mantener el secreto de los actos o hechos jurídicos que se realizan ante su fe, ya que en caso contrario estaría cometiendo un delito en perjuicio de las partes involucradas en el instrumento notarial. Sin embargo, se publicó una reciente Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en la cual las partes que intervienen en un instrumento notarial tienen la protección de sus datos personales y el Notario estará facultado para darle el uso, divulgación y almacenamiento de datos personales en el ejercicio de sus funciones, exclusivamente para la elaboración de las actas o escrituras. No obstante el titular o representante legal podrá solicitar al Notario el acceso, rectificación, cancelación u oposición a los datos personales que obren en las bases de datos del fedatario público; en el caso de la transferencia de datos personales (que no obren en escritura pública) a terceros conforme a esta disposición federal, es necesario el aviso de privacidad, en el cual contendrá una clausula en la que se indique que el titular acepta o no la transferencia de sus datos el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que corresponda al responsable que transfirió sus datos.

En la Republica Mexicana los notarios tenemos la obligación de ser un auxiliar en la impartición de justicia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial en los Estados que la conforman. En ese sentido, el Notario ante una orden judicial o inspección, existe la obligación de presentar la matriz dentro de juicio, sin embargo, en nuestro país por la misma naturaleza de nuestra actividad proporcionamos la totalidad de la información que obra en la matriz de la escritura, inclusive se asientan datos adicionales como es el pago de impuestos y derechos en los trámites notariales, inclusive se dejan asentados los importes de dichas retenciones fiscales, es decir, en nuestra actividad proporcionamos mas información de lo que es necesario para dejar constancia del acto jurídico por su misma naturaleza, ya que la Ley Especial (del notariado)nos obliga a dejar constancia de esta información, en el mismo cuerpo del instrumento notarial.

2.5 ¿Cuáles son las consecuencias previstas en su legislación nacional para el caso de violación de dicho secreto, si es que se prevén algunas? quedan sujetas en su caso a las disposiciones del Código Penal del Estado por el delito de revelación del secreto profesional ¿Incurre en responsabilidad civil, penal, disciplinaria, otras? Penal ¿La responsabilidad del notario es directa, es personal o también por sus empleados? Directa y personal ¿Puede el notario dejarse aconsejar por terceros, sean estos la propia Cámara o Colegio, sea un juez, etc ? ¿Le libera ello de responsabilidad ?

3. Es posible que existan excepciones a la obligación de tener que guardar secreto, quizás en un procedimiento penal o fiscal Si

3.1 ¿Préve su legislación nacional excepciones o limitaciones o derogaciones del secreto? Si

3.2 En caso afirmativo, cite los textos que lo prevén, con un brevísimo resumen de los mismos. En particular:

– derogaciones en materia penal Cuando se requiera por orden judicial o miunisterial fundada y motivada.

– derogaciones en materia fiscal Hay información que por ley debemos dar a la autoridad fiscal sin que esto suponga violación al secreto profesional, y también estamos obligados a entregar a la autoridad fiscal la información que fundada y motivadamente requiera.

– derogaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo La ley no está vigente todavía.

3.3 ¿Existen algunos organismos que tengan un especial derecho a solicitar tal información del notario? En caso afirmativo:

- ¿Por qué procedimiento obtienen tal información del notario?
- ¿Qué información y documentos les pueden ser transmitidos?
- ¿De qué forma se les realiza la comunicación? ¿Existe algún control judicial o profesional? Algunos notarios hacen constar en un acta de certificación de hechos la actuación mediante la cual se permite la compulsión de documentación existente en la notaría.

3.4 Si se cita judicialmente al notario, ¿puede ser interrogado acerca de hechos realizados al margen de su actividad notarial? Si ¿Puede ser interrogado a propósito de hechos conocidos en el ejercicio de su ministerio? Sí, aunque podría no estar obligado a responder.

3.5 El cliente que intenta un proceso contra el notario por razón de su actividad ¿pierde por ello el derecho de prevalerse del secreto notarial?

3.6 ¿Puede un acreedor obtener del notario información de datos o de actos que le permitan cobrar su crédito? No

3.7 ¿Puede el notario desprenderse de una matriz? En caso afirmativo, ¿cuál es el proceso y cuáles los controles?

3.8 ¿Se limita la comunicación del contenido de las escrituras a las propias partes o puede darse también a terceros, tengan o no un interés legítimo en la información solicitada? Únicamente a las partes que intervienen o a quienes justifiquen representar los derechos de esas personas.

3.9 ¿Cómo asegura su legislación nacional la compatibilidad entre la obligación de secreto profesional y la publicidad del registro de la propiedad? Por ejemplo, en caso de divorcio, ciertos hechos o información puede ser útil para la partición de bienes, pero innecesarios para la inscripción: ¿constan en el documento que se presenta a inscripción registral? El régimen matrimonial en muchos casos debe acreditarse expresamente al Notario, y el mismo relaciona los documentos con los que se comprobaron estos estados civiles.

3.10 ¿Puede informar el notario acerca del testamento a terceros? Quienes aparezcan haber intervenido en ellos o justificaren representar los derechos de esas personas. Tratándose de disposiciones testamentarias, después de la muerte del testador, los herederos o legatarios, albacea y los autorizados por mandamiento judicial o ministerial

4. Ciertos organismos públicos, semipúblicos o privados interrogan a veces al notario sobre el contenido de un dossier o expediente que él tramita. A veces el notario entra en contacto con otros compañeros o abogados. ¿Cómo se gestiona el secreto en tales casos?

4.1 ¿Debe el notario guardar secreto de la correspondencia que se el envía para preparar los documentos? Si

4.2 ¿Quedan también bajo el secreto notarial las cartas o correos electrónicos que el notario envía a las partes o a terceros? Si

2. Que **no suponga una carga excesiva**: se caracterizan por su

2.1. Legalidad: sólo por ley deberían establecerse tales obligaciones o cargas

2.2. Generalidad: deben aplicarse respecto de todas las personas por igual siempre que se encuentren en idéntica situación.

2.3. Equidad

2.4. Proporcionalidad: la colaboración que se exija debe ser proporcional con los objetivos perseguidos por el interés público, gravar lo mínimo posible y no perjudicar otras finalidades al menos igual de respetables; que no se abuse impidiéndole dedicarse a ejercer su función por el exceso de tiempo que requiere la colaboración

2.5. Racionalidad: la colaboración que se solicite debe ser útil para el logro de una finalidad adecuada de interés público; que no se soliciten datos superfluos o innecesarios; que no se colapsen las oficinas

2.6. Temporalidad

2.7. Gratuidad: ¿deben serlo? En relación a los límites de la colaboración para que esto no suponga una carga excesiva por parte de la autoridad de requerir la intervención de un Notario Público, esta último tiene en todo momento el derecho de cobrar al particular o a la misma autoridad, los honorarios que sean necesarios para su actuación personal o por medio de sus colaboradores, es decir, se requiere la celebración de convenios con las autoridades en materia de colaboración, para acotar claramente la actuación del Notario de manera gratuita o en su caso ser expensados los gastos que sean necesarios en esta colaboración que se requiera. Se sugiere que esta retribución que se haga al Notario no sea forzosamente en dinero, sino por ejemplo que se pueda realizar a través de tasas preferenciales en las obligaciones fiscales que tenga el Notario con la autoridad competente, para que su trabajo de colaboración presente una retribución para el fedatario.

2.8. Certeza: perfectamente definidas, que no induzca a errores o abusos

2.9. Subsidiariedad: sólo cuando el Estado no pueda conseguir los objetivos pretendidos por otros medios que no le resulten excesivamente gravosos; la Administración debe dirigirse al notario cuando no pueda haber obtenido la información del interesado.

2.10. Colaboración entre órganos de la administración: coordinación administrativa; no solicitar al notario información que ya obra en poder de la Administración, aunque sean departamentos diferentes.

3. Que la colaboración **no conlleve atentar contra derechos fundamentales de terceras personas**: respecto al derecho a la intimidad personal y familiar

4. Que **guarde relación con el quehacer notarial** de autenticar actos y contratos: seguridad del tráfico

5. Que si son requerimientos individuales de información se presenten en debida forma: escrito, firmado, debidamente motivado.

Comente a raíz de su legislación y situación nacional este apartado.

2.1. Legalidad. El Notario en su actuación ejerce libremente la profesión e la cual está capacitado para ejercerla, con la única limitación de hacerlo conforme a las disposiciones legales; por lo tanto, ejercerá solo cuando esté expresamente facultado para realizar sus actividades. En ese sentido, el Notario Público no podrá ser obligado a hacer o dejar de hacer, sino hasta que un mandato judicial conforme a derecho (principio legal) lo obligue a efectuar actividades más allá de lo que en su actuación normal debe realizar en beneficio de la comunidad, en la cual presta sus servicios profesionales. Es decir, la autoridad no puede obligar al Notario a ejercer en horarios, responsabilidades u obligaciones más allá de lo que la ley establece.

2.2. Generalidad. El Notario Público conforme al principio general de la Ley, la cual establece claramente los casos en que se requiera de su intervención, implica que el fedatario debe ser observador de las disposiciones generales, para que su actuación sea conforme a derecho y evitar así la aplicación limitada o particular ante los hechos o actos jurídicos, en lo cuales intervenga como tal. Es decir, que el Notario ante los distintos supuestos y asuntos diversos deberá aplicar incondicionalmente la misma disposición legal, aplicable al caso concreto, sin permitir flexibilidad o aplicación parcial de la Ley, no obstante que la autoridad le obligue aplicar o ejercer en infracciones más allá de lo estrictamente legal. .

2.3. Equidad. En el actuar del Notario debe en todo momento mantener una igualdad en las condiciones económicas, culturales, preparación y conocimiento del acto jurídico o el hecho, en el cual es necesaria o se solicita la intervención del fedatario publico, es decir, el supuesto de que el Notario lleve el asunto jurídico bajo un

principio de equidad, no debe significar una carga excesiva para las partes y mucho menos para el Notario, quien deberá asesorar, explicar e interpretar el contenido del instrumento público que se realiza ante su fe, para cuidar en todo momento que las partes que intervengan, no se sientan en desventaja una hacia las otras, para que el negocio jurídico se desarrolle en plena igualdad, no obstante las desigualdades culturales, económicas o de cualquier otra índole entre las partes contratantes, inclusive a pesar de que provenga de una autoridad.

2.4. Proporcionalidad. El Notario Público debe atender los objetivos que por la naturaleza de su cargo deben atender al interés público, para gravar en lo menos posible en un ámbito de igualdad a las partes involucradas, sin que la atención sea mayor a una de ellas, por razón de ser una autoridad y obligue de manera excesiva al fedatario, en el tiempo y en los quehaceres que esta demande. Es decir, el Notario deberá mantener su independencia ante la autoridad y ofrecer sus servicios profesionales como a cualquier ente del sector privado.

2.5. Racionalidad. La autoridad podrá en el ámbito de su competencia solicitar la colaboración de un Notario Público, siempre y cuando esté acorde al interés público, ya que en la medida que la autoridad le solicite al fedatario datos superfluos o innecesarios, se comete una carga excesiva para el fedatario público, ya que por las mismas disposiciones legales que actualmente rigen en México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, protege y tutela la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. En ese sentido, al Notario Público no se le deberá solicitar por parte de la autoridad información carácter privado o más allá de lo estrictamente necesario, para atribuir alguna responsabilidad en la omisión de algún delito que la misma Ley especial lo autorice o por resolución de autoridad competente; fuera de estos casos, el Notario Público no podrá ser requerido por la autoridad, para proporcionar información en los casos razonables y sin que esto represente para el Notario una posible violación, por no guardar el secreto profesional.

2.6. Temporalidad. En su actuación, el Notario debe tener en cuenta el término de su actuación, es decir, no podrá requerirse al Fedatario por parte de la autoridad de manera reiterativa en los asuntos legales que se le requiera, ya que el fedatario debe estar disponible al público en general y no puede existir un “monopolio” por parte de un funcionario público, para atender los asuntos con

“su Notario” como elemento de propiedad o “control sobre este último”.

2.7. Gratuidad. El Notario tiene el derecho, por el libre ejercicio de sus funciones, para cobrar los honorarios necesarios en su sustento económico y el de sus colaboradores. La autoridad al requerir los servicios de un Notario Público deberá expensar a dicho fedatario de los emolumentos necesarios en su actuación profesional, sin embargo, por la urgencia del caso (p.e. testamento), bien común (mes del testamento), solidaridad institucional (p.e. arancel preferencial para las fuerzas armadas), el Notario salvo convenio con dichas autoridades, estará obligado a manejar en los casos concretos un arancel preferencial y excepcionalmente hacerlo de manera gratuita.

2.8. Certeza. El Notario Público en su actuación debe proveer certeza jurídica, sin que su actuación induzca a errores a la comisión de abusos en perjuicio de los particulares. Es decir, el fedatario deberá conducirse en un plan de transparencia, sin pretender una actuación incondicional a favor de la autoridad, ya sea por el tráfico de influencias o acciones coercitivas, por parte de la misma autoridad en perjuicio del Notario Público; ya que en este caso los instrumentos notariales traerían vicios, con la inconveniencia de que las afirmaciones del Notario no implicarán la realidad de los hechos conforme a la ley.

2.9. Subsidiariedad. En el principio constitucional de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley estrictamente le autoriza, no así el particular que su ámbito jurídico es actuar libremente mientras la ley no se lo prohíba; la autoridad podrá acudir ante el fedatario, para solicitar información de particulares, siempre y cuando en concordancia con el principio de legalidad y racionalidad, el Notario puede actuar subsidiariamente en beneficio del Estado, siempre y cuando no se afecte la privacidad o intimidad del gobernado.

2.10. Colaboración entre los órganos de la organización.

Sin perjuicio de la subsidiariedad que el Notario pueda ofrecer al Estado, los órganos de la administración deberán tener una coordinación estrecha entre sí, para que la información que requiera cada uno en lo particular, se la proporcione la autoridad competente.

En ese sentido, el Notario Público colaborará con los órganos de la administración pública, siempre y cuando la autoridad requiriente motive y fundamente que la información solicitada al Notario, no obra en poder de la autoridad requirente ò de cualquier otra en el ámbito de su competencia.

VI.- Responsabilidad del notario por falta de colaboración

El Notario al desempeñar su función pública se encuentra sujeto a una amplia gama de posibles ilícitos que puede cometer, en el ámbito disciplinario, administrativo, civil, penal y fiscal.

En nuestro país existe una carga en la responsabilidad notarial, en las tres esferas del gobierno. Es decir, las Leyes Federales imponen al Notario una gran cantidad de obligaciones y en el mismo sentido están plasmadas las Leyes Estatales y Municipales. En ese sentido, resulta complicado poder emitir una opinión sucinta de la responsabilidad del Notario, ya que cubre diversos ámbitos, para lo cual considero necesario entrar en detalle para hacer un análisis más preciso de la responsabilidad disciplinaria, administrativa, civil y penal, en la cual el Notario Público puede ser un sujeto activo de responsabilidad.

Se analizarán cada una de las responsabilidades del Notario mencionadas en el párrafo anterior, necesarias para evitar un desbordado ejercicio de la fe pública, limitando al Notario en tan delicada función que le ha delegado el Estado.

Concepto de Responsabilidad.

a) Sus orígenes. Proviene del griego “spendo” y del latín “spondeo”. En nuestro idioma, tiene un significado social hablar de irresponsable, como una persona que se obliga a hacer algo y no lo cumple.

b) De acuerdo a algunos autores, responsabilidad es la actitud que tiene el sujeto de conocer y aceptar las consecuencias dañosas de sus actos; por ello, la ley lo sanciona. Así, en toda infracción se produce un movimiento circular: dada una obligación o deber jurídico, por su incumplimiento nace la obligación resarcitoria.

c) Presupuestos. El hecho ilícito como acto voluntario, reprobado por la ley y que causa un daño, se compone de los siguientes elementos:

c.1) La Conducta antijurídica, que infrinja alguna norma del ordenamiento. La cual se compone, a su vez, de los siguientes elementos:

c.1.1) Omisión. Es la oposición contradictoria a la realización del deber.

c.1.2) Transgresión. Es lo contrario al deber ser y se exterioriza en una conducta antijurídica.

c.2) El daño causado, que debe ser injusto o ilícito. Es decir, el daño provoca un perjuicio, menoscabo, detrimento, dolor o aflicción en la persona o bienes por acción de otro.

c.3) La relación casual o conexión entre la infracción y el daño.

c.4) La Imputabilidad, es decir, la relación que la norma jurídica establece entre un acto ilícito y la sanción.

1. Responsabilidad disciplinaria:

1.1. Texto que la regula

1.2. Tipos o causas

1.3. Sanciones

El servicio notarial requiere una organización especial, ya que existe una superintendencia ejercida sobre el Notario por el Gobierno, ya que este órgano delega una función esencial que es la fe pública en una persona. Este sistema da origen a la responsabilidad disciplinaria, a la cual se debe sujetar el Notario; por lo que, el Notario está obligado a la colegiación en el Consejo de Notarios, sujetándose a la Ley del Notariado en el Estado, a su reglamento y las disposiciones que se dicten en materia del Notariado por parte del Ejecutivo (artículo 120 y 128 de la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro). La Directiva del Consejo de Notarios auxiliar al Gobierno del Estado, para hacer cumplir a los Notarios con esta responsabilidad en nuestra Entidad Federativa.

2. Responsabilidad civil

2.1. Texto que la regula

2.2. Tipos o causas

2.3. Sanciones

Desde los orígenes del Derecho Civil, a partir del Derecho Romano, se establecían principios básicos de convivencia, tales como: vivir honestamente, dar a cada quien lo suyo y no causar daños a los demás. La sanción jurídica por la transgresión a estos principios, trae como consecuencia la obligación de indemnizar. Por lo tanto la realización de un daño, abstención (actuación negligente), intención de dañar o actuación ilícita, culposa o dolosa, así como la existencia de un daño material o moral en el sujeto pasivo por parte del Notario, genera una responsabilidad civil por parte de este “funcionario público” sin que se encuentre amparado por el Gobierno Estatal.

a) La Responsabilidad Civil del Notario puede ser extracontractual, contractual o legal:

a.1) La Responsabilidad Civil Extracontractual por parte del Notario, se refiere al nexo causal entre la abstención, conducta culposa o dolosa y el daño provocado. Por lo que, el Notario incurre en responsabilidad y por tanto debe pagar los daños y perjuicios ocasionados.

La palabra “daño” proviene del latín “damnum”, que significa deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor;⁶ conforme al artículo 1994 del Código Civil para el Estado de Querétaro, se entiende por daños: la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

La palabra perjuicio de acuerdo al Diccionario Inverso Ilustrado es “el daño producido a algo o a alguien”,⁷ y su definición legal se encuentra contemplada en el artículo 1995 del Código Civil en el Estado, (pie establece se reputa perjuicio la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera o Debiera haberle obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Es decir, esta responsabilidad extracontractual surge Cuando el Notario a pesar de tener obligación de realizar un acto, no lo hace, y con motivo de ese incumplimiento ocasiona daños y perjuicios.

a.2) Responsabilidad civil Contractual. El Notario al ejercer su función, puede estar sujeto a una abstención o actuación ilícita, culposa o dolosa, que dé lugar a uno de los Sigüientes supuestos:

a.2.1) Causar daño y perjuicios al abstenerse de autenticar, por medio de un instrumento público, un hecho o acto jurídico, cuando la ley no lo permita excusarse. Lo anterior se encuentra regulado por los artículos 31 y 32 a contrario denso, de la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro.

La relación jurídica que existe entre el Notario y su cliente es de tipo contractual, lo cual regula nuestro Código Civil mediante el contrato de prestación del servicio profesionales (artículos 2486 al 2498 del Código Civil para el Estado de Querétaro), por lo que, el Notario será responsable con las personas a quienes sirve. Por negligencias impericia o dolo; sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Además, el Notario que obre lícitamente o contra las buenas costumbres causando daño a otro, estará obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable a la víctima (artículo 1790 del código civil para el Estado de Querétaro).

a.2.2) Provocar daño y perjuicio en virtud de la actuación notarial morosa, negligente o falta de técnica notarial. Es decir, el Notario como profesional del derecho, debe buscar las soluciones jurídicas y económicas más adecuadas, para resolver los problemas planteados; ya que, al escoger soluciones inadecuadas, por ejemplo,

⁶ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS., “Diccionario Jurídico Mexicano”, obra citada, p. 811.

⁷ (17) SELECCIONES. “Diccionario Inverso Ilustrado”, hora citada, p. S22.

al haber redactado un contrato en lugar de otro o cuantificado indebidamente los impuestos, causando daños y perjuicios, pena que responde mediante indemnización.

a.2.3) Causar daños y perjuicios, por la declaración judicial de nulidad o inexistencia de un acta o escritura pública. Ya que, por ejemplo, al (declararse la invalidez del contrato por motivo de la ilicitud en el objeto (artículo 1674 fracción III del Código Civil en el Estado), los directamente afectados podrán demandar al Notario, sí como consecuencia de su actuación resulte la nulidad o inexistencia.

a.2.4) Originar daños y perjuicios al no inscribir o inscribir tardíamente en el Registro Público de la Propiedad o del Comercio, una escritura pública o acta que sean inscribibles. El Notario debe dar seguridad jurídica a las partes, para lo cual, la ley sustantiva civil le otorga la facultad y obligación de presentar aviso preventivo del acto jurídico que ante él se vaya a celebrar, para que surta efectos contra terceros por un plazo de treinta días naturales, o un aviso definitivo, por un plazo de 180 días si no se presentó aviso preventivo, o un plazo menor (180 días menos los días transcurridos desde la presentación del aviso preventivo Artículo 2917 del Código Civil del Estado de Querétaro), todo ello siempre que haya sido debidamente pensado.

a.2.5) Ocasionar daño material y moral a la víctima o a su familia en la comisión de un delito.

El Notario al causar este tipo de daños, se encuentra en los supuestos que controla el artículo 37 del Código Penal vigente en nuestro Estado, al establecer la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, para lo cual deberá reparar los daños y perjuicios ya sea: I.- Restituyendo la cosa obtenida por el delito y si no fuera posible el pago del precio de la misma o; II.- La indemnización del daño material y moral causado.

Para la reparación de los daños y perjuicios, los fijará el Juez atendiendo a las pruebas dentro del procedimiento penal; mientras que para la reparación del daño moral, lo hará, en consideración a la afectación moral sufrida por la víctima y al estudio que haga de los aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible, la lesión o peligro del bien jurídico (artículos 43 en relación al 68 del Código Penal en nuestro Estado).

a.3) Responsabilidad Civil Legal. La ley impone al Notario diversas obligaciones, y al no cumplirlas, puede ocasionar un daño o un perjuicio, por lo que:

a.3.1) En caso de culpa, el Notario debe responder cualquiera que sea el estado de esta (leve, grave o gravísima).

a.3.2) Otorga fianza el Notario. En el Caso del Distrito Federal, para responder de los daños o perjuicios, que se llegaren a causar en el ejercicio de la función notarial.

b) Para que la responsabilidad civil se produzca, es necesaria la existencia de los siguientes elementos:

b.1) La existencia de un daño o de un perjuicio.

b.2) Que el daño o perjuicio se cause por un acto u omisión.

b.3) Que exista una relación entre el daño o perjuicio causado y el acto u omisión imputado al Notario.

c) De acuerdo a la XVI Jornada Notarial que se llevó a cabo en Bonaerense, Tandil en el año de 1978, la agenda contempla como primer tema fue “La Función Notarial y su Responsabilidad”, de la cual se definieron los siguientes conceptos:

c.1) La responsabilidad notarial es aquella en la que incurra un Notario por incumplimiento de las obligaciones que le impone el ejercicio de su función.

c.2) Habrá responsabilidad civil cuando el Notario, faltando a los deberes propios de su actividad, incumpliere obligaciones que tengan origen convencional o legal por acción u omisión, culposa o dolosa, productora de un daño que la sea imputable según las reglas de la causalidad.

d) Reparación del daño. Consiste en:

d.1) La responsabilidad material o económica.

d.2) La responsabilidad moral.

d.3) Imposición de una multa.

d.4) Posibilidad de prisión a un Notario.

3. Responsabilidad penal

1.1. Texto que la regula

1.2. Tipos o causas

3.3. Sanciones

El Notario se encuentra sujeto a penas corporales y económicas, conforme al Código penal para el Estado de Querétaro, ya que no goza de ningún fuero especial en el ejercicio de sus funciones, por lo que su tratamiento Judicial será igual a cualquier ciudadano.

Los delitos desde el punto de vista de reprochabilidad, se dividen en dolosos y culposos, con esto, se llega al juicio de valores y el Estado reprocha la conducta seguida por el sujeto activo.

No interesa el estudio de los delitos culposos o no intencionales, también conocidos en el lenguaje jurídico como imprudenciales,

ya que un Notario Público en ejercicio de sus funciones no podría cometer un delito con estas características.

Anteriormente en la Ley del Notariado para el Estado, de Querétaro en su artículo segundo, el Notario era considerado un funcionario público, por lo que, sería aplicable el capítulo correspondiente del código Penal para los servidores públicos. Sin embargo, con la reforma del 26 ed junio del 2009, el Notario no es un funcionario ya que no está contemplada su función en la Constitución o Ley Reglamentaria, no recibe ingreso con cargo al presupuesto estatal, no pertenece a ningún órgano del Estado, ni está bajo su dirección o dependencia y su cargo es vitalicio.

Existen sanciones penales al Notario como responsable directo en su conducta dolosa. El Código Penal en nuestro Estado tipifica los siguientes delitos, en los Cuales se puede encontrar como sujeto activo en la Comisión del delito al Notario, en el ejercicio de sus funciones:

a) Delito de Revelación de Secretos:

e.1) La Ley del Notariado para el Estado de Querétaro (artículo 33), en un ámbito administrativo, obliga al Notario a guardar el secreto profesional y hacer que lo guarden sus dependientes, sobre los actos que autoricen y afin sobre la existencia de ellos, salvo si las leyes les permiten u ordenan revelar el acto.

a.2) El Código Penal en el Estado de Querétaro en su artículo 159 establece: "A quien teniendo conocimiento de un secreto, o estando en posesión de un documento..., derecho lo revele o entregue, sin el consentimiento de quien, tenga (derecho a otorgarlo y que pueda causar daño para cualquier persona, se le aplicará prisión de tres meses a un año y hasta 20 días multa o trabajo en favor de la comunidad hasta por tres meses. Si el que divulgase el secreto, documento,...., lo hubiere conocido o recibido por razón de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, la pena de prisión será de uno a 5 años, hasta 50 días multa y suspensión en sus funciones de dos meses a un año". Son excluyentes de Responsabilidad en este delito:

a.2.1) Cuando los informes los deba dar el Notario en forma obligatoria porque así lo establezcan las leyes. Tal sea el caso, cuando los jueces civiles y penales en sus atribuciones puedan legalmente pedir al Notario algún informe o documento. Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 33 de la Ley del Notariado, artículos 74 y 95 segundo párrafo del código de Procedimientos civiles en el Estado de Querétaro.

a.2.2) Los actos concretos que deban inscribirse en el Registro Público de la Propiedad, de los cuales puede enterarse cualquier persona que no hubiese intervenido en ellos, siempre que tenga interés legítimo. Por lo tanto, el Notario no incurre en responsabilidad si revela sobre un acto inscrito, ya que su inscripción le dio publicidad.

b) Delitos de falsificación en documentos públicos y uso de documentos falsos o alterados.

El Documento Público es la obra en que se plasma la actividad notarial; es decir, **la fe pública no es verbal, sino siempre documental**. El Notario que otorgue una escritura o un acta notarial, alterando o falsificando en alguna de sus partes, incurre en el delito de falsificación de un documento público.

El Código penal para el Estado de Querétaro, en su artículo 231 tipifica como delito la falsificación y uso indebido de documentos, de la siguiente manera: “Se impondrá prisión de tres meses a tres años y de 15 a 90 días multa, al que para obtener un beneficio o para causar un daño: I-- Falsifique o altere un documento público o privado; II-- Inserte o haga insertar en un, documento público o privado hechos falsos concernientes a circunstancias que el documento deba probar; altere uno verdadero o lo suprima, oculte o destruya; III.- Aproveche la firma o huella digital estampada en un documento en blanco, estableciendo una obligación o liberación o la estampe en otro documento que pueda comprometer bienes jurídico ajenos, ó IV.- Se atribuya, al extender un documento, o atribuya a un tercero un nombre, investidura, título, calidad o circunstancia, que no tenga que ser necesaria para la validez del acto. Igual pena se aplicará al tercero si actúa en su representación o con su consentimiento.

El Código Penal para el Estado de Querétaro en su artículo 234, tipifica el delito de uso de documentos falsos o alterados, de la siguiente manera: ‘Al que haga uso de un documento falso o alterado para obtener un beneficio o causar daño se le impondrá prisión de 3 meses a 3 años y de 15 a 90 días de multa’.

La falsificación, de documentos y el uso de documentos falsos o alterados tienen como elemento común la intención maliciosa, el ánimo de dañar y la alteración de la verdad asegurada por la fe pública, lo que constituye un atentado mayor en contra de la seguridad Jurídica.

c) El Delito de Abuso de Confianza.

El Notario tiene la obligación de hacer las liquidaciones y pagar con el dinero recibido de su cliente los impuestos y derechos

que correspondan, pero si el cliente no le entrega el dinero suficiente, la responsabilidad del Notario se reduce hasta la liquidación, sin embargo, cuando el Notario recibe el dinero y no paga los impuestos, sino que dolosamente se queda con el disponiendo para otros fines, comete el delito de abuso de confianza.

El Código Penal en su artículo 191, establece que, comete el delito de Abuso de Confianza el que con perjuicio de alguien, disponga para sí o para otro, de cualquier cosa mueble ajena, de la que se le haya cran emitido la tenencia pero no el dominio; las penas son: 1.- Prisión de tres meses a cuatro años y hasta 180 días multa cuando el valor de lo dispuesto no exceda de 600 veces el asalarío mínimo; 2.- Prisión de 4 a 10 años y de 180 a 500 días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda de 600 veces el salario mínimo.

d) Delito de fraude.

El Notario al tener la obligación de pagar con el dinero del cliente los impuestos, que por el contrato celebrado ante él se generan, puede engañarlo simulando un supuesto más elevado al realmente requerido, con esta conducta, puede ser sujeto de la comisión del delito de fraude.

El Código Penal para el Estado en su artículo 193, establece que, comete el delito de fraude, el que engañando a alguien, o aprovechando del error en que este se halle se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance algún lucro indebido. Se le impondrán las siguientes penas: 1.- Prisión de 3 treses a 4 años y hasta 180 días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 600 veces el salario mínimo; y 2.- Prisión de 4 a 10 años y de 100 hasta 500 días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de 600 veces el salarlo minino.

En el caso de impuestos federales, el delito que se puede cometer, es por defraudación fiscal (ver punto 2.2.7. más adelante).

Existen sanciones penales al Notario como responsable indirecto en la conducta dolosa del delincuente. El Código Penal en nuestro Estado tipifica los siguientes delitos, en los cuales se puede encontrar como sujeto auxiliar en la comisión del delito al Notario, en el ejercicio de sus funciones:

a) Usura. El Notario, en grado de coparticipación, puede auxiliar a alguna de las partes, para obtener de la otra, ventajas usurarias por medio de contratos, convenios o documentos celebrados ante él.

El Código Penal en nuestro Estado en su artículo 190 establece, que comete el delito de usura el que valiéndose de la suma igno-

rancia, notoria inexperiencia o extrema miseria o necesidad de otro, obtiene de este ventajas usurarias por medio de contratos, convenios o documentos mercantiles o civiles, en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado o tasas de interés bancario autorizado, se le impondrá la pena señalada en el artículo 193 del mismo Código (relativo al delito de fraude anteriormente mencionado).

b) Fraude por simulación de un contrato o acto jurídico.

El Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 318, tipifica el delito de simulación de un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier beneficio indebido. Sin embargo, el Código penal para el Estado de Querétaro no tipifica este delito y lo deja en atribuciones del orden común, como se procede a explicar en el siguiente punto.

El Código Civil para el Epatado de Querétaro en sus artículos 2049, 2052 y 2053, define al acto simulado cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pesado o no de ha convenido entre ellas, facultando a los terceros perjudicados, para solicitar la nulidad de los actos simulados con la restitución de la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos o intereses si los hubiera.

El Notario pueda contribuir a simular un contrato, que atendiendo a la voluntad de las partes, debería encontrarse en una clasificación del Derecho Civil diversa a la plasmada en el documento elaborado por el Notario; es decir, que la voluntad real de las partes no se encuentra manifiesta en el contrato. Esta responsabilidad civil puede convertirse, si es debidamente comprobada, en responsabilidad fiscal penal en el grado de copoticipación para el Notario, como se explica en el punto 2.2.7. más adelante, relativo al delito de evasión fiscal.

4. Responsabilidad administrativa

4.1. Texto que la regula

2.2. Tipos o causas

2.3. Sanciones

a) Esta clase de responsabilidad se define como la infracción del Notario a cualquiera de los preceptos establecidos en la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro, que no están previstos en las leyes penales o civiles, en el ejercicio de sus funciones:

a.1) Procedimiento en la Responsabilidad Administrativa. Para aplicar sanciones administrativas a los Notarios, el Ejecutivo se auxiliará de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Notarios,

integrada por los últimos cuatro ex-Presidentes y del Presidente en funciones. La queja deberá presentarse ante dicha comisión, por conducto de su Presidente o ante el Secretario de Gobierno, si dicha queja es contra del Presidente. La Comisión deberá emitir sus opiniones en un término de diez días hábiles a partir de la fecha en que reciba la queja, deberá escuchar a las partes afectadas, recibir prueba y tomará sus acuerdos por mayoría de votos. Para desahogar debidamente este procedimiento, la Comisión de Honor y Justicia, queda facultada para hacer las visitas que sean necesarias a los despachos de los Notarios, así como las inspecciones que se requieran en el Protocolo y documentos relativos al caso. La Comisión emitirá su opinión al Secretario de Gobierno del Estado para su resolución y aun cuando la Comisión determine que es improcedente la petición de la parte quejosa, emitirá la opinión respectiva al Secretario de Gobierno, para su conocimiento y resolución (sobre la ejecución o no ejecución de la sanción), siendo acta última inapelable. Lo anterior, se encuentra establecido en los artículos 111, 112 y 113 de la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro.

b) Cuando este funcionario comete delitos del orden común en el ejercicio de sus funciones, se sujeta a una Responsabilidad por Delitos Oficiales, que será sancionada por el Estado que le confirió su confianza:

b.l) Procedimiento en la responsabilidad por delitos oficiales. Las acusaciones, denuncias o querellas se presentarán ante el Secretario de Gobierno, atendiendo al requisito de procedibilidad, quien llevará el asunto al acuerdo del Ejecutivo a efecto de que se integre una Comisión Investigadora compuesta por el mismo Secretario de Gobierno, como Presidente; por el Presidente del Consejo de Notarios en funciones, como Secretario; por un Licenciado en Derecho que designe el Ejecutivo, como Vocal en unión de un Notario que designe el Consejo, que funcionarán en pleno. La Comisión Investigadora procederá a instruir la averiguación, previa ratificación de la denuncia, querella o acusación. Dicha comisión, en un plazo de treinta diez prorrogable por un término igual, practicará con intervención y audiencia del Notario, todas las diligencias necesarias para la comprobación del delito que se le impute, describiendo características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tomado el Notario.

Transcurrido el plazo anterior y su prórroga, la Comisión en un término de diez días, formulará su dictamen que turnará al Ejecutivo para que este, oyendo al Procurador de Justicia declare

si lugar o no proceder en contra del Notario (artículo 118 de la Ley del Notariado para el Estado de Querétaro).

a.2) Sanciones Administrativas. Atendiendo al Procedimiento por Responsabilidad Administrativa mencionado en el inciso a.1) anterior, una vez que se ha dictado resolutive cobra la ejecución de la sanción, el Notario se hace acreedor a las siguientes correcciones disciplinarias:

c.1) Apercibimiento. Es una amonestación verbal o escrita al Notario para que cambie su actitud y de solución al problema menor en el cual se encuentra involucrado.

c.2) Multa de veinte mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona. Ante una violación a la Ley del Notariado en el Estado, que tenga un calificativo de mayor gravedad a un apercibimiento, el Notario se hará acreedor a esta sanción monetaria.

c.3) Suspensión de funciones hasta por seis meses. Cuando el Notario infrinja disposiciones establecidas en esta Ley, que hayan causado daños y perjuicios mayores, el Notario se hará acreedor a una suspensión hasta por seis meses en el ejercicio de sus funciones.

c.4) Separación definitiva del cargo. Cuando al Notario haya cometido delito, en los cuales se le vinculó responsabilidad administrativa o responsabilidad por delitos oficiales, debidamente tramitados en los procedimientos mencionados en los incisos a) y b) de este punto (2.2.3.); motivo por el cual, se le determine culpable de sus actos dolosos calificados de graves, haciéndose acreedor a una separación definitiva en el ejercicio de sus funciones.

5.- Otro tipo de responsabilidad

Responsabilidad Fiscal.

La actividad fiscal del Notario tiene un triple carácter:

a) De verificador. Debe manifestarle al cliente si la documentación que presenta, reúne los requisitos que las leyes fiscales exigen.

b) De liquidador. Debe cuantificar en pesos el importe del impuesto que se cause con motivo de la operación otorga ante él, exigiendo al cliente, el importe del impuesto o impuestos que deben pagarse por las operaciones que ante el se celebren.

c) De enterador. Debe pagar el impuesto ante la oficina recaudadora que corresponda, si al afectado ha sido expensado.

Los dispositivos fiscales que debe cumplir el Notario en el ejercicio de sus funciones son de naturaleza federal, estatal y Municipal:

a) Leyes Federales:

a.1) Código Fiscal de la Federación.

Este Código en su artículo 26 fracción primera establece la responsabilidad solidaria del Notario, cuando autoriza definitivamente un instrumento notarial, al ser solidariamente responsable con los contribuyentes, por la obligación que tiene de recaudar las contribuciones al celebrar el acto jurídico ante su presencia; además, en el artículo sexto fracción segunda, segundo párrafo del citado Código, establece el caso en que el Notario no efectuó el pago a que está obligado el contribuyente, el Notario estará obligado a enterar a la Tesorería de la Federación, una cantidad equivalente a la que corresponda, no obstante lo anterior, el Notario no está obligado a prestar sus servicios, si los interesados no le anticipan dichos importes, lo que desde luego lo imposibilita para autorizar el instrumento relativo.

En relación con el Registro Federal de Contribuyentes, el artículo 27 de este Código en su párrafo tercero establece que los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se hagan constar actas constitutivas de fusión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción o cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes. La responsabilidad en que incurre el Notario por no cumplir esta obligación, se establece en los artículos 79 fracción V y 80 fracción IV del mismo código. los cuales establecen sanciones monetarias por dicha omisión.

El Notario está obligado a dar informes y datos en el ejercicio de sus funciones, cuando sea requerido por las autoridades fiscales a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, con la obligación de facilitar copia simple y certificada de las actas y escrituras o de los documentos comprobantes del pago de los impuestos, siempre y cuando no se incurra en la revelación de secretos (artículo 33 de la Ley del Notariado y 159 del Código Penal para el Estado de Querétaro).

El Notario en su carácter de liquidador, incurre en responsabilidad de pago de multas y recargos en caso de que el impuesto no sea pagado de acuerdo a los términos del artículo 73 fracción II del Código Fiscal y se hará acreedor a las sanciones que establece la fracción III del mismo artículo; es decir, los accesorios (multas, y recargos) serán a cargo de los Notarios y los contribuyentes solo quedaran obligados a pagar las contribuciones omitidas.

a.2) Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En el artículo 33 de esta Ley, se establece como obligación del Notario calcular y enterar bajo su responsabilidad, el impuesto cau-

sado por la enajenación de bienes inmuebles, no destinados a casa habitación (comercio).

a.3) Ley del Impuesto sobre la Renta.

El Notario por cada una de las operaciones consignadas en escritura pública bajo el protocolo a su cargo, deberá calcular el pago provisional bajo su responsabilidad, el cual se hará mediante declaración, a más tardar dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se firme la escritura y lo enterarán a las oficinas autorizadas. Es decir, conforme a los artículos 103 y 150 de esta ley, el Notario en materia de enajenación de bienes inmuebles por personas físicas (nacionales o extranjeros con ingresos en nuestro país), tiene la obligación de liquidar el ingreso gravado; es decir, cuantificarlo en pesos y hacer el pago provisional.

El Notario no tiene obligación de calcular y enterar este impuesto, en materia de enajenación de inmuebles por personas morales, ya que los artículos 10, 12 y 58 de esta Ley, los obliga a calcular y declarar a ellos mismos el impuesto sobre la renta; y cuando se trate de personas morales no contribuyentes que están debidamente reguladas en los artículos 68, 69, 70 y 73 de la misma ley, el Notario deberá hacer mención de que se trata de tales casos y procederá en sus términos.

b) Leyes Estatales:

b.1) Código Fiscal del Estado de Querétaro. (Publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" el día 1° de enero de 1992). El artículo 25 de este Código, establece que los Notarios son solidariamente obligados al pago de los créditos fiscales sobre cualquier documento que autoricen, si no se cercioran de que estén cubiertos los impuestos o derechos respectivos, en su artículo 83 del mismo dispositivo legal, establece obligaciones que debe cumplir el Notario, y en caso contrario, incurrirá en diversas violaciones fiscales, tales como:

b.1.1) Autorizar contratos o Escrituras en, donde no se haya cumplido con las disposiciones fiscales.

b.1.2) No expedir notas de liquidación de alguna prestación fiscal, aun en los casos de exención; alteradas, o falsificarlas, dando lugar a la evasión total o, parcial del gravamen.

b.1.3) Autorizar actos o contratos de enajenación, Disolución de sociedades y otros, relacionados con fuentes de ingresos gravados por la ley, sin cerciorarse de que este al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales o sin dar el aviso o avisos que prevengan las leyes de la materia.

b.1.4) Inscribir o registrar documentos que carezcan de la constancia de pago del gravamen correspondiente; cooperar con los infractores o facilitar en cualquier forma la omisión total o parcial del gravamen.

b.1.5) No destinar al pago del gravamen las cantidades ministradas por los contribuyentes.

b.1.0) Traficar con los documentos o comprobantes de pago de prestaciones faciales o hacer uso ilegal de ellos.

b.1.7) El Notario que cometa alguna de las infracciones mencionadas anteriormente (incisos b.1.1) al b.1.6)), será sujeto al pago de multas, tomando como base el salario mínimo vigente, que van de uno a quince veces, de cinco a treinta veces y de diez a cincuenta veces según la gravedad de estas.

b.1.8) Delitos en particular:

b. 1.8.1) Comete el delito de defraudación fiscal, el Notario que con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido, en perjuicio del fisco estatal. Su sanción es de tres meses a seis años de prisión, si el monto de lo defraudado no excede de ciento cincuenta veces el salario mínimo vigente en la zona y cuando exceda de esta cantidad, la pena será de tres a nueve años de prisión. En el caso de que no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado, la pena será de tres meses a seis años de prisión, sin embargo, no es formulario querrela alguna en el caso de que el Notario entere espontáneamente, con sus recargos, antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio.

b.1.8.2) Comete el delito equiparable a la defraudación fiscal el Notario que simule actos jurídicos en declaraciones para fines fiscales, ingresos o utilidades menores a los obtenidos; proporcione con falsedad a las autoridades fiscales los datos que se le requieran; oculte a las autoridades fiscales. Total o parcialmente la producción sujeta a impuestos o el monto de las ventas.

b.1.8.3) Comete el delito de encubrimiento en delitos fiscales, el Notario que ayude a eludir las investigaciones de la autoridad o sustraerse a la acción de esta y oculte, altere, destruya o haga desaparecer pruebas o instrumentos del delito o asegure por el inculpado el objeto o provecho del mismo.

c) Leyes Municipales:

c.1) Ley del impuesto Predial. (Publicada en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga- el día 28 de diciembre de 1995):

c.1.1) En su artículo 8, establece que los Notarios Públicos son responsables solidarios de este impuesto, cuando autoricen escrituras

que contengan actos traslativos de dominio, cuando no se obtenga la respectiva constancia de no adeudo de impuesto y, en su caso, el recibo de pago, por lo menos del Último bimestre siguiente al día en que se celebre la operación.

c.1.2) En su artículo 31, establece que los Notarios están obligados a dar aviso de la celebración de todo acto jurídico que se realice con bienes inmuebles ubicados en el Estado.

c.2) Ley General de Hacienda de los Municipios. (Publicada en el Periódico oficial “La Sombra de Arteaga” el día 1° de enero de 1992):

c.2.1) En su artículo 109, establece que los causantes del impuesto de operaciones traslativas de dominio de inmuebles, tendrán la obligación de presentar a la Tesorería Municipal a través de los Notarios ante quienes se celebre el contrato, la declaración respectiva para enterar al impuesto, agregando el pago del impuesto predial al corriente y copia de la escritura en que se hubiere hecho constar dicho acto Jurídico. El Notario tiene la obligación de presentar estas declaraciones dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de autorización preventiva de las escrituras públicas (artículo 112).

c.2.2) En su artículo 110, establece que los Notarios calcularán, bajo su responsabilidad, el impuesto que deba causarse por actos, contratos u operaciones a que se refieren los actos traslativos de dominio.

c.2.3) En su artículo 157, relativo a las infracciones y sanciones, se establece que los Notarios Públicos que autoricen contratos por la Compraventa de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, cuando no se acredite que estén al corriente en el pago de los derechos del agua potable, pagaran una Multa de 100 a 500 pesos.

2.2-7. Responsabilidad Fiscal Penal.

a) La responsabilidad penal fiscal, está señalada en los diferentes supuestos que contiene el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación y cuyo contenido no hace, sino reproducir el artículo 13 del Código Penal Federal:

a.1) El artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, establece que son responsables de los delitos fiscales, quienes: consientan la realización del delito; realicen la conducta o el hecho descrito en la Ley; cometan conjuntamente el delito; se sirvan de otra persona como instrumento para cometerlo; induzcan dolosamente a otro a cometerlo; ayuden a otro dolosamente para su comisión; auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.

a.2) El artículo 96 del código Fiscal de la Federación, establece que es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en el, después de la ejecución del delito con ánimo de lucro: adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias deba presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines; ayude en 'cualquier forma al inculpado a 'eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de esta, u oculte, altera, destruya o haga desaparecer huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo. El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis aftosa.

b) Para proceder penalmente en contra del Notario por el delito de defraudación fiscal (artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación), se necesita que la Secretaria de Hacienda y Crédito público formule declaratoria o querrela, en la cual deberá cuantificar el daño o el perjuicio. Existe el sobreseimiento (artículo 92 del Código fiscal de la Federación) de la Secretaria en la comisión de este delito, cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien estos créditos quedan garantizados a satisfacción de la propia Secretaría.

Responda según su legislación y situación nacional al anterior apartado VI.

VII.-Problemas técnicos de la colaboración.- USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS:

Hemos venido haciendo referencia a la utilización de las nuevas tecnologías en la colaboración que el notario presta o puede prestar con la Administración.

La colaboración no está exenta de dificultades y el uso de las nuevas tecnologías debería servir para paliarlas o, al menos, aminorarlas.

La colaboración entraña generalmente

1.- Excesiva carga: multiplicidad de informes, listados e índices; complejidad de su elaboración, la periodicidad de su envío es extraordinariamente variada (individual, mensual, trimestral, semestral, anual), partes por documento, incluso por acto o negocio celebrado (un solo documento puede requerir varios partes); superposición de información, a veces a diferentes destinatarios, a veces a distintos

departamentos de la misma Administración; coste material y de personal disponible.

2.- Excesiva dependencia y utilización del papel: ¿es ello necesario y conveniente? O ¿hay que buscar la optimización de recursos utilizando las nuevas tecnologías, sustituyendo el papel por soportes magnéticos, como el diskette, el CD, incluso los envíos telemáticos encriptados, con firma electrónica, incluso avanzada?

Problemas de conservación (del papel) —¿es necesario?— y de comunicación (en papel) ¿debe fomentarse la utilización en la comunicación de nuevas tecnologías como, por ejemplo, índices únicos que comprendan toda la información para que desde un centro se distribuya a cada destinatario la que necesite?

¿Cuáles son los límites a la utilización de las nuevas tecnologías? La utilización de técnicas electrónicas y cibernéticas no deberían afectar a los principios de asesoramiento, inmediatez, conservación y reproducción del documento o de la firma, manteniendo la seguridad jurídica, el pleno valor probatorio y la fuerza ejecutiva del documento.

¿Cuál debería ser el objetivo de las nuevas tecnologías aplicadas a la función notarial?

– Lograr una firma electrónica notarial como instrumento técnico al servicio de la función notarial (necesidad de disponer de los medios necesarios que la hagan disponible).

– Crear el documento público notarial electrónico que logre una rápida, segura y eficaz circulación, conservando la esencia del mismo (autenticidad de autor, formal y de contenido) bajo el control de los notarios, presencia física de las partes, firma del documento por las partes y el notario, tanto en papel como en soporte electrónico, con conservación de sus efectos.

– Lograr la comunicación entre ciudadanos y Administración, sirviéndose del notario como oficial público para la mejor prestación de la función, con acceso a los Registros públicos

– Conseguir la circulación del documento notarial con plenitud de garantías y de efectos

El hecho de que el notario pueda llegar a tener que exhibir sus libros, su protocolo, le obliga a la conservación de escrituras, de libros y archivos, su acceso debe ser restringido y sólo para quien tenga interés legítimo. Debe estudiarse la formación, conservación y reproducción —perenne— de los archivos digitales y su relación con los en papel.

¿Debe limitarse la aceptación en depósito de documentos de los cuales el notario no sea su autor o en los que no haya intervenido? ¿Deben digitalizarse también?

3.- Errónea interpretación de la obligación de información que pesa sobre el notario. El uso de las nuevas tecnologías no debe acarrear una vulneración del secreto notarial. Debe limitarse a lo que realmente sea imprescindible la información que de forma generalizada y habitual envíe el notario, como también la que dé a raíz de requerimiento individualizado. La información debe facilitarse siempre cuando sea en beneficio del cliente, o sea, para evitar que tenga que hacerlo él. Más riguroso y restrictivo debe ser el facilitar información a la propia Administración cuando no responda a la anterior finalidad y aquí debe compatibilizarse con el deber de secreto notarial.

4.- La información que brinde el notario debería seguir un camino de ida y vuelta, o sea, del notario a otros órganos y viceversa, para poderse aprovechar los notarios en general de la información facilitada por ellos como colectivo.

¿Qué papel **están jugando** en su país las nuevas tecnologías para facilitar la colaboración del notario con la Administración pública? *Concréteme cuáles son esas tecnologías? ¿Cómo funcionan? ¿Qué grado de seguridad ofrecen / qué medidas de seguridad se adoptan?*

1. En la conservación de documentos
2. En el envío de información
3. En la recepción y obtención de información
4. En las comunicaciones:

Coméntese la cuestión teniendo desde la perspectiva la relación:

– entre el Notario y otros órganos de la Administración **de su propio país**, judiciales o administrativos (Administración estatal, autonómica, provincial, local, departamental, comarcal, etc; Registros públicos, Ayuntamientos, Catastros, Fisco, etc).

– entre el notario y otros notarios y órganos de la Administración **de otros países** que no sean el propio de aquél: obtención de información, facilitar la circulación del documento notarial y el despliegue de sus efectos: reconocimiento y ejecución.

¿Qué papel **podrían jugar en el futuro** en su país las nuevas tecnologías en ese mismo radio de actuación? *Concréteme cuáles podrían ser esas tecnologías y las medidas a adoptar, especialmente de seguridad.*

Sin duda la evolución del notariado latino, nos ha permitido día a día dotar de mayor certeza, confianza e invulnerabilidad a las

actuaciones jurídicas que ante nuestra fe se realizan. No debemos olvidar que el citado progreso de la actividad del Fedatario, se debe en gran medida, al constante estudio, novedosos planteamientos con fines preventivos a la ilegalidad, acuciosidad, análisis, y finalmente, la aplicación de ese resultado, dentro del ordenamiento positivo respectivo, para que surta sus efectos *herga homnes*.

Dichas premisas, me permito situarlas en el siguiente pasaje, que evidentemente influencio a nuestro sistema mexicano notarial. Tuvimos desde una actuación (*funciones notariales que se desempeñaban, sin el nombramiento de Notario Público como tal,*) que data de nuestra civilización mesoamericana, en donde el asentamiento de actuaciones contractuales, acontecimientos e inclusive pago de tributos, se llevaban a cabo mediante la elaboración de lo que se conoce como una “escritura ideográfica”, en contraste hasta un México actual, en donde la utilización de herramientas tecnológicas nos facilitan de manera ordenada la reproducción y publicación de los actuaciones de los otorgantes.

Así pues tenemos que, la utilización de nuevas tecnologías, recursos informáticos han permeado a nuestra sociedad como medios fundamentales y prácticamente vitales para el progreso de cualquier actividad, por tanto, y en razón de esos efectos colaterales, nuestra actividad notarial se ve en la constante necesidad de incorporación a tales medidas.

Los constantes cambios de la realidad social siempre están cuestionando el ordenamiento jurídico existente, planteando problemas que se constituyen en nuevos retos para el Derecho Notarial.

En ese tenor y en comentario a las nuevas tecnologías que paulatinamente se han venido aplicando (uso de la red, computadoras, usb, soportes magnéticos, dispositivos dactilares), en apoyo a nuestra función notarial, tenemos que efectivamente, el auxilio de los referido medios han aminorado la carga y complejidad de la elaboración y publicación de instrumentos públicos, logrando por consecuencia una mayor protección jurídica.

Sin embargo, algunas propuestas como las que se siguen (*siguiendo con el tema de las nuevas tecnologías*), resultarían de sumo apoyo para el desempeño de nuestras actividades

1.- La optimización de las relaciones con las Autoridades Registrales en materia mercantil (*Registro de Comercio*) y con las Administraciones públicas. (Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía, Servicio de Administración Tributaria, entre otras).

2.- La realización de un sistema de pagos de impuestos, derechos u obligaciones pecuniarias bajo los principios de Transparencia y Verificabilidad de los comparecientes (*conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información*). Con ello se dotaría al contribuyente de tener acceso directo al pago de sus impuestos que el mismo Notario calculó y entero, teniendo con ello una mayor eficiencia y economía, tanto en tiempo y papelería.

3.- La actualización y acceso público en línea respecto de las operaciones inmobiliarias y mercantiles.

4.- La coordinación entre los Peritos Valuadores autorizados, entidades Municipales (Catastro), Estatales (Registro Público) y Federales (Servicio de Administración Tributaria) con respecto al envío en línea del Avalúo, como de los formatos autorizados para enajenación de bienes.

5.- El envío en LÍNEA del Notario Público a la autoridad estatal (*Registro Público*) respecto de los diversos avisos (primer aviso, aviso pre-preventivo, preventivo y definitivo), esto con el fin de proteger a los acreedores y adquirentes de bienes entorno de cualquier posible gravamen que pudiera recaer sobre el inmueble materia de operación.

De lo anterior, también debemos denotar algunos factores negativos que pudieran perjudicar a nuestro entorno notarial, tales como lo son la falta de privacidad en cierta información, el fraude y la manipulación a la información que transita por el sistema.